

MEDELLÍN, MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2012

Gaceta Departamental

Registrando la historia de Antioquia desde 1908



EDICIÓN DE 60 PÁGINAS

Registrado en el Ministerio de Gobierno por Resol. No. 000474 de junio de 1967 - Tarifa postal reducida No. 2333 de la Admón Postal Nal. - Porte Pagado

No.19.191

COMERCIALES

SUMARIO RESOLUCIONES MAYO 2012

NUMERO	FECHA	PAGINA	NUMERO	FECHA	PAGINA
041398	Mayo 15 de 2012	2	041402	Mayo 15 de 2012	18
041399	Mayo 15 de 2012	6	041403	Mayo 15 de 2012	21
041400	Mayo 15 de 2012	10	041404	Mayo 15 de 2012	25
041401	Mayo 15 de 2012	14	041376	Mayo 15 de 2012	29



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA GENERAL
Imprenta Departamental de Antioquia
Dr. Sergio Arroyave Maya
Director



ORDEN AL MÉRITO
CÍVICO Y EMPRESARIAL
MARISCAL JORGE ROBLEDO
CATEGORÍA ORO



RESOLUCIÓN N°

041398

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 6 de abril de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al establecimiento **Granero Popular** ubicado en la Carrera 9 No. 9 - 63 del municipio de La Unión, Antioquia, cuyos **Propietarios** son los señores **Jair de Jesús Patiño Orozco** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.352.518 y **Jairo de Jesús Cardena Pavas** identificado con cédula de ciudadanía No. 3.520.442.

Que mediante Auto No. 73 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 483 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos a los señores **Jair de Jesús Patiño Orozco** y **Jairo de Jesús Cardena Pavas**, en sus calidades de **Propietarios** del establecimiento denominado **Granero Popular**, por infringir los artículos 271, 304, 305 y 306 de la Ley 9ª de 1979, Artículo 41 del Decreto 3075 de 1997 y numeral 5.8 del artículo 5 de la Resolución 5109 de 2005.

Que dicho pliego de cargos fue notificado personalmente a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa, respetándoles de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentaron los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno



valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 6 de abril de 2011, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

El artículo 271 de la Ley 9 de 1979, determinó que los alimentos y bebidas, empacados o envasados, destinados para venta al público, deben llevar un rótulo en su empaque, el cual debe contener el nombre del producto, el nombre y dirección del fabricante, el contenido neto en unidades del Sistema Internacional SI, registro sanitario e Ingredientes.

Por su parte la Resolución No. 5109 de 2005 expedida por el Ministerio de la Protección Social, regula el contenido que deben llevar los alimentos en los envases, rótulos, etiquetas y empaques, de allí radica la importancia de la información de la fecha de vencimiento, lote, marca, los cuales al carecer de esta información son motivo de decomiso por el riesgo que puede llevar a incurrir en errores de despacho, suministro, dispensación de alimentos.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establece la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera los alimentos sin registro sanitario son fraudulentos y por lo tanto no son comercializables.

En cuanto al hecho de carecer de Registro Sanitario, se le recuerda al implicado que todo alimento que se expendi directamente al consumidor bajo marca de fábrica y con nombres determinados, deberá obtener registro sanitario expedido conforme a lo establecido en el Decreto 3075 de 1997.

Frente lo anterior, manifiestan los implicado que reconocen que se les decomisaron los alimentos pero que su intención no era ir en contra de la norma, además que no tiene claro cuales productos se pueden comercializar o no, porque consideran que la norma no ha sido bien difundida. Tales productos los adquirieron favorables para venderlos favorables alas familias campesinas.

La Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 5109 de 2005 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.



La actividad que realizan los señores **Jair de Jesús Patiño Orozco y Jairo de Jesús Cardena Pavas**, en el establecimiento denominado **Granero Popular**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Es por ello por lo que los argumentos planteados en el escrito de descargos carecen en absoluto de soporte no sólo probatorio sino legal, toda vez que como **Propietarios** le es exigible, de acuerdo con la ley, una mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, por la trascendencia social que representa la comercialización de alimentos, al estar de por medio tal como se expuso con antelación la salud de la población.

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que "**La ignorancia de la ley no sirve de excusa**". Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que "*Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico*". Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna a la implicada para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la "*producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...***" Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de



todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para los señores **Jair de Jesús Patiño Orozco y Jairo de Jesús Cardena Pavas** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) Amonestación.*
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) Decomiso.*
- d) Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a los implicados que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a los señores señores **Jair de Jesús Patiño Orozco** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.352.518 y **Jairo de Jesús**



Cardena Pavas identificado con cédula de ciudadanía No. 3.520.442, en sus calidades de **Propietarios** del establecimiento denominado **Granero Popular** ubicado en la Carrera 9 No. 9 - 63 del municipio de La Unión, Antioquia, con **MULTAS** equivalentes **DIECISÉIS (16) Y DIECISÉIS (16) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** respectivamente, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLESE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041399

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001,



artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 14 de noviembre de 2010, la Policía Nacional del Municipio de Yolombó realizó una incautación al **Vehículo de placas LLI 976** de propiedad del señor **Jorge Alberto Santamaría Ford** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.542.735, y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en la congelación del licor, pues no aportaban facturas que acreditaban la procedencia del licor.

Que en virtud de lo anterior, se procedió a enviar muestra de licor al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para que analizara su procedencia, entidad que el día 24 de noviembre de 2010 mediante oficio radicado 201000230618, previo análisis al contenido y al material de empaque, concluyó que las muestras de licor corresponden con productos **Fraudulentos** pues NO cumplían los requisitos del producto FLA, de acuerdo a dicho resultado se aplicó medida sanitaria consistente en la destrucción de cuatrocientas ochenta (480) unidades de licor (Aguardiente Antioqueño y Ron Medellín).

Que mediante Auto No. 23461 del 26 de diciembre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 469 del 8 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Jorge Alberto Santamaría Ford**, en su calidad de **Propietario** del **Vehículo de placas LLI 976**, por infringir el artículo 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979 y literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 14 de noviembre de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.



La responsabilidad desplegada el día de los hechos, se encuentra enmarcada dentro de las normas de autenticidad y de las bebidas alcohólicas, específicamente sobre requisitos físico químicos, grado alcoholímetro, color, características organolépticas y empaque por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal, así lo manifiestan los artículos 576 de la Ley 9 de 1979, en los artículos 109 y siguientes del Decreto 3192 de 1983.

La conducta objeto de aplicación de incautación el día 14 de noviembre de 2010 es una infracción a los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979, el artículo 2 numerales 6 literales a, c, h y el artículo 49 numeral 1, numeral 8.3 y 8.3.3 del Decreto 3192 de 1983 su violación se comprobó en flagrancia por lo que se procedió al decomiso de los productos que constituyen evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en el Art. 109 del Decreto 3192 de 1983, cuando establece que el Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud, están en la obligación de ejercer control y vigilancia sanitaria, sobre las fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas y sobre las bebidas alcohólicas para garantizar las condiciones sanitarias, de los procesos de elaboración, hidratación, envase, distribución, importación y exportación se procederá al decomiso del producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3192 de 1983 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza al señor **Jorge Alberto Santamaría Ford**, en el **Vehículo de placas LLI 976**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de licores por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la **“producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...”** Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**



Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho a la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas, se le atribuye al investigado, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factores atenuantes para el señor **Jorge Alberto Santamaría Ford**, los buenos antecedentes y la ignorancia invencible según lo contemplado en el artículo 182 del Decreto 3192 de 1983.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 124 del Decreto 3192 de 1983, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Jorge Alberto Santamaría Ford** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.542.735, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas LLI 976**, con **MULTA** equivalente a **CUATROCIENTOS (400) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de

Apelación, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041400

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 13 de noviembre de 2010, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia al **Estanquillo y Cigarrería Babilonía** ubicado en el Corregimiento Totumo del municipio de Necoclí, Antioquia, cuyo **Propietaria** es la señora **Lina Ramírez** identificada con cédula de ciudadanía No.

32.203.591, y aplicó medida sanitaria de seguridad consistente en la congelación de licor, ya que presentaba alteración en la tapa.

Que en virtud de lo anterior, se procedió a enviar muestra de licor al laboratorio de la Fábrica de Licores de Antioquia para que analizara su procedencia, entidad que el día 11 de noviembre de 2010 mediante radicado 201000227125, previo análisis al contenido y al material de empaque, concluyó que las muestras de licor corresponden con productos **Fraudulentos** pues NO cumplían los requisitos del producto FLA, de acuerdo a dicho resultado se aplicó medida sanitaria consistente en la desnaturalización del producto.

Que mediante Auto No. 22737 del 31 de octubre de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 23087 del 24 de noviembre de 2011 se formuló cargos a la señora **Lina Ramírez**, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Estanquillo y Cigarrería Babilonia**, por infringir el artículo 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979 y literal a numeral 6 artículo 2 del Decreto 3192 de 1983.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos a la implicada, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificada por edicto, no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 13 de noviembre de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

La responsabilidad desplegada el día de los hechos, se encuentra enmarcada dentro de las normas de autenticidad y de las bebidas alcohólicas, específicamente sobre requisitos físico químicos, grado alcoholímetro, color, características organolépticas y empaque por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal, así lo manifiestan los artículos 576 de la Ley 9 de 1979, en los artículos 109 y siguientes del Decreto 3192 de 1983.

La conducta objeto de aplicación de incautación el día 13 de noviembre de 2010 es una infracción a los artículos 417 y primer inciso del artículo 418 de la Ley 9 de 1979, el artículo 2 numerales 6 literales a, c, h y el artículo 49 numeral 1, numeral 8.3 y 8.3.3 del Decreto 3192 de 1983 su violación se comprobó en flagrancia por lo que se procedió al decomiso de los productos que constituyen evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en el Art. 109 del Decreto 3192 de 1983, cuando establece que el Ministerio de Salud y los Servicios Seccionales de Salud, están en la obligación de ejercer control y vigilancia sanitaria, sobre las fabricas de alcohol y bebidas alcohólicas y sobre las bebidas alcohólicas para garantizar las condiciones sanitarias, de

los procesos de elaboración, hidratación, envase, distribución, importación y exportación se procederá al decomiso del producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3192 de 1983 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la señora **Lina Ramírez**, en el establecimiento denominado **Estanquillo y Cigarrería Babilonia**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de licores por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Además es su responsabilidad, no sólo adquirir los productos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización, a través de una adecuada recepción y revisando que cada producto tenga la información correspondiente a cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**"* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en la visita realizada al establecimiento, se le atribuye a la investigada, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factores atenuantes para la señora **Lina Ramírez**, los buenos antecedentes y la ignorancia invencible según lo contemplado en el artículo 182 del Decreto 3192 de 1983.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 124 del Decreto 3192 de 1983, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Lina Ramírez** identificada con cédula de ciudadanía No. 32.203.591, en su calidad de **Propietaria** del establecimiento denominado **Estanquillo y Cigarrería Babilonia** ubicado en la Corregimiento Totumo del municipio de Necoclí, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CIENTO CINCUENTA (150) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA**Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**RESOLUCIÓN N° 041401**

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 23 de noviembre de 2010, la Policía Nacional del Municipio de Don Matías realizó una incautación en el **Vehículo de placas TPU 673**, de propiedad del señor **José Sepulveda Caro** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.557.705 y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y posterior desnaturalización de cien (100) kilos de carne que no cumplían con las condiciones sanitarias para su comercialización.

Que mediante Auto No. 78 del 10 de enero de 2012, se inició la presente

investigación y por Auto No. 515 del 13 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **José Sepulveda Caro**, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TPU 673**, por infringir los artículos 278; 279, 304, 305 y 341 de la Ley 9 de 1979.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 23 de noviembre de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Es así entonces como los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y construidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establecen la prohibición de tener o expendir productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos transportados sin las adecuadas condiciones sanitarias no son comercializables, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

La Ley 9ª de 1979 es una norma de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que es un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **José Sepulveda Caro**, en el Vehículo de placas TPU 673, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en

virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la “*producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...***” Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**”

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **José Sepulveda Caro** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos

es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **José Sepulveda Caro** identificado con cédula de ciudadanía No. 98.557.705, en su calidad de **Propietario** del **Vehículo de placas TPU 673**, con **MULTA** equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041402

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 27 de marzo de 2010, la Policía Nacional del Municipio de Fredonia realizó una incautación en el **Vehículo de placas TOB 673**, de propiedad del señor **Jhon Jairo Uribe Restrepo** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.459.970 y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y posterior desnaturalización de ciento veinte (120) kilos de carne que no cumplían con las condiciones sanitarias para su comercialización.

Que mediante Auto No. 85 del 10 de enero de 2012, se inició la presente investigación y por Auto No. 514 del 13 de marzo de 2012 se formuló cargos al señor **Jhon Jairo Uribe Restrepo**, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TOB 673**, por infringir los artículos 278; 279, 304, 305 y 341 de la Ley 9 de 1979 e Inciso final del Artículo 345 Ley 9 de 1979, literal c artículo 31 Decreto 3075 de 1997, Artículo 39 numeral 2 del Decreto 1500 de 2007.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 27 de marzo de 2010, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Es así entonces como los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y contruidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos transportados sin las adecuadas condiciones sanitarias no son comercializables, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

Igualmente, hay que aclarar que es un producto considerado de mayor riesgo en salud pública de conformidad con lo expuesto en el artículo 3º del Decreto 3075 de 1997 por lo que requiere conocer la procedencia del producto destinado para la venta al público para proteger la salud de los consumidores, en tal sentido quien se dedica a la actividad de producción y/o expendio de alimentos debe cumplir con tales requisitos

La conducta objeto de aplicación de medida sanitaria el día es una infracción al inciso final del artículo 345 de la Ley 9ª de 1979, al artículo 31 literal c del Decreto 3075 de 1997 y numeral 2 del artículo 39 del Decreto 1500 de 2007, por lo que al comprobar su violación, se procedió al decomiso de los productos que constituyen la evidencia física de la conducta infractora, que por demás se encuentra tipificada en los artículos 305 de la Ley 9ª de 1979 y 84 del Decreto 3075 de 1997, cuando establecen que se prohíbe la tenencia y expendio de productos no aptos para el consumo humano y que se procederá al decomiso el producto que no cumpla con las normas sanitarias vigentes.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza el señor **Jhon Jairo Uribe Restrepo**, en el Vehículo de placas TOB 673, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues

tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *la prevalencia del interés general.*"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Jhon Jairo Uribe Restrepo** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Jhon Jairo Uribe Restrepo** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.459.970, en su calidad de **Propietario del Vehículo de placas TOB 673**, con **MULTA** equivalente a **CIENTO VEINTE (120) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN Nº 041403

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA
SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA,**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que el día 17 de octubre de 2009, la Policía Nacional del Municipio de Carepa realizó una incautación en el **Vehículo transportador de Carnes de placas TMY 749**, de propiedad de la empresa Frigourabá, representada legalmente por el señor **Nelkyn Chaverra Caicedo** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.526.133 y lo puso a disposición del Técnico del Área de la Salud adscrito a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia quien procedió a aplicar medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso y posterior desnaturalización de diferentes productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias para su comercialización.

Que mediante Auto No. 6101 del 30 de mayo de 2011, aclarado por el auto No. 21421 del 12 de agosto de 2011, se inició la presente investigación y por Auto No. 61 del 6 de enero de 2012 se formuló cargos al señor **Nelkyn Chaverra Caicedo**, en su calidad de **Representante Legal, o quien haga sus veces**, del **Vehículo transportador de Carnes de placas TMY 749**, por infringir los artículos 278; 279, 304, 305 y 341 de la Ley 9 de 1979.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos al implicado, tales como llamadas telefónicas y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificado por edicto.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 17 de octubre de 2009, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Es así entonces como los artículos 278, 279 y 341 de la Ley 9 de 1979, han determinado que los vehículos destinados para el transporte de carnes deberán ser diseñados y construidos en forma que protejan los productos de contaminaciones y aseguren su correcta conservación, para lo cual deberán contar con equipos adecuados y un sistema que permita mantener los productos a una altura que impida su contacto con el piso.

Respecto a la violación a los artículos 304 y 305 de la Ley 9ª de 1979, dichos artículos establecen la prohibición de tener o expender productos no aptos para consumo humano dentro de los cuales se encuentran todos lo que por sus características anormales puedan afectar la salud del consumidor, en virtud de ello se considera que los alimentos transportados sin las adecuadas condiciones sanitarias no son comercializables, pues ya no se garantiza la calidad, ni las cualidades específicas que espera el consumidor y por lo tanto no son aptos para el consumo humano.

La Ley 9ª de 1979 es una norma de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que es un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza la empresa **Frigourabá**, en el **Vehículo transportador de Carnes de placas TMY 749**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, **distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados...**"* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en ***la prevalencia del interés general.***"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para el señor **Nelkyn Chaverra Caicedo** el hecho de no haber sido sancionado antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber al implicado que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar al señor **Nelkyn Chaverra Caicedo** identificado con cédula de ciudadanía No. 15.526.133, en su calidad de **Representante Legal**,

o quien haga sus veces, de la empresa Frigourabá, empresa propietaria del Vehículo transportador de Carnes de placas TMY 749, con **MULTA** equivalente a **CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8 o en la cuenta de Ahorros del Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

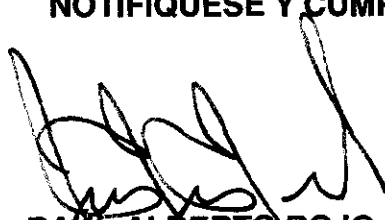
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución al implicado, haciéndole saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041404

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE FACTORES DE RIESGO DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 577 de la ley 9ª de 1979, artículo 43 numeral 43.3.8 de la Ley 715 de 2001, artículo 34, literal c de la Ley 1122 de 2007, el artículo 67 del Decreto 3075 de 1997, artículo 19 de la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social y demás normas concordantes

CONSIDERANDO:

Que corresponde a la Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, conforme a lo establecido en la Ley 9ª de 1979, el Decreto 3075 de 1997, la Ley 715 de 2001 y la Ley 1122 de 2007 y la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Protección Social, ejercer la inspección, vigilancia y control de todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, definidos como tales en el Decreto 3075 de 1997 y que se ejercen dentro de la Jurisdicción del Departamento de Antioquia.

Que los días 2 de junio y 8 de septiembre de 2009, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Cafetería Tienda Escolar de la Institución Educativa Rural Técnica Agropecuaria La Herradura** ubicada en la Corregimiento La Herradura del municipio de Armenia, Antioquia, cuya **Representante Legal, o quien haga sus veces**, es la señora **Luz Eugenia Palacio Tobón** con cédula de ciudadanía No. 21.831.028.

Que mediante Auto No. 3942 del 25 de noviembre de 2010, se inició la presente investigación y por Auto No. 23264 del 9 de diciembre de 2011 se formuló cargos a la señora **Luz Eugenia Palacio Tobón**, en su calidad de **Representante, o quien haga sus veces**, de la **Cafetería Tienda Escolar de la Institución Educativa Rural Técnica Agropecuaria La Herradura**, por infringir de los artículos 175, 176 y 207 de la Ley 9 de 1979 y artículo 13 literal a, artículo 14 literal a, artículo 15 literal b, artículo 36 literales a y f, artículo 37 literales a, c y d y artículo 38 del Decreto 3075 de 1997.

Que luego de realizar diligencias pertinentes para lograr la notificación personal del auto de cargos a la Representante Legal de la Institución Educativa, tales como visita del Técnico Área de la Salud y el envío de citación, ésta no fue posible, por lo que fue notificada por edicto.

Que este despacho no consideró conducente el decreto de pruebas de oficio de conformidad con el artículo 100 del Decreto 3075 de 1997, pues se le dio pleno valor probatorio al acta de medida sanitaria del día 2 de junio y 8 de septiembre de 2009, la cual sirvió de base para adelantar la investigación y formular los cargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

Las medidas sanitarias de seguridad de conformidad con los artículos 87 y 90 del Decreto 3075 de 1997, son aplicables para la protección de un bien considerado de interés público como lo es la salud y se practican sin perjuicio de las sanciones que se deriven del proceso sancionatorio.

Como se anotó anteriormente, en visita realizada el día 2 de junio y 8 de septiembre de 2009 a la **Cafetería Tienda Escolar de la Institución Educativa Rural Técnica Agropecuaria La Herradura**, y de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 69 y 70 del Decreto 3075 de 1997, se dejaron requerimientos en visitas anteriores y como constan en la respectiva acta visita, por el incumplimiento a los requisitos higiénico locativos en el restaurante escolar se aplicó la suspensión del servicio como medida sanitaria de seguridad.

Por lo que es pertinente aclarar que en dicho establecimiento destinado a elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano, debe tener como objetivo el cuidado y la conservación de los alimentos, conservándolos con las

especificaciones técnicas con las que fueron fabricados, para lo cual deben garantizar el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de productos, teniendo en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la temperatura, humedad y combustibilidad.

Igualmente se debe contar con unas condiciones higiénico - locativas, las cuales han sido reglamentadas para este tipo de establecimiento, con el propósito de garantizar la calidad de los alimentos que se distribuyen al público y que están contenidas en los artículos 175, 176 y 207 de la Ley 9 de 1979 y artículo 13 literal a, artículo 14 literal a, artículo 15 literal b, artículo 36 literales a y f, artículo 37 literales a, c y d y artículo 38 del Decreto 3075 de 1997.

Por otra parte el Decreto 3075 de 1997 ha determinado que todas las personas que realicen actividades de manipulación de alimentos deben tener formación en materia de educación sanitaria, especialmente en cuanto a prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos. Igualmente deben estar capacitados para llevar a cabo las tareas que se les asignen, con el fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar la contaminación de los alimentos.

Es de anotar que al momento de imponer la sanción, no se tendrá en cuenta el cargo formulado por el hecho de no se realizar los controles médicos a los empleados, puesto que estos controles solo serán necesarios, siempre y cuando un profesional de la medicina así lo determine.

La Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997 son normas de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por los asociados del estado, toda vez que son un claro y expreso mandato legal que regulan todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, en virtud de que la salud es considerada como un bien de interés público.

La actividad que realiza en la **Cafetería Tienda Escolar de la Institución Educativa Rural Técnica Agropecuaria La Herradura**, se encuentra enmarcada dentro de la comercialización de alimentos por lo que es su obligación someterse al cumplimiento de la normatividad señalada y se convierte en sujeto de vigilancia y control de las autoridades sanitarias, en virtud de la competencia de Ley asignada a éstas, pues tal actividad económica puede presentar un eventual riesgo para la salud de la comunidad cuando es ejercida fuera del contexto legal.

Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución Política toda persona es libre de escoger la profesión u oficio que desee, el ejercicio del comercio tiene límites legales cuando tal actividad está destinada entre otras a la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos según lo estipulado por el artículo 1º del Decreto 3075 de 1997, ello tiene asidero en la facultad que tiene el estado de intervenir en la economía por expreso mandato constitucional (artículo 334), lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Ley 9ª de 1979 y el Decreto 3075 de 1997, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en **la prevalencia del interés general.**"

Las normas referenciadas, son parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los **derechos colectivos** de todos los habitantes del país, entre ellos el derecho la salud que es conexo con el derecho fundamental a la vida.

Cuando se trata de investigaciones administrativas, corresponde a la administración mediante investigación técnica demostrar la existencia u ocurrencia de los hechos que generaron la sanción, y en cuanto a la responsabilidad del investigado en el caso particular, ésta se le atribuye a título de **culpa grave** de acuerdo al artículo 63 del Código Civil, pues se evidencia la imprevisión, en la comercialización de los alimentos en el establecimiento, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes legales.

La responsabilidad imputada frente a las irregularidades encontradas en las visitas realizada al establecimiento, se le atribuye a la investigada, a título de **culpa grave**, por la imprevisión, la negligencia y el descuido en el manejo de los productos y por ende, del establecimiento como tal, al haber descuidado el cumplimiento de sus deberes, al tenor del artículo 63 del Código Civil.

Al momento de imponer la sanción se tendrá en cuenta como factor atenuante para la señora **Luz Eugenia Palacio Tobón** el hecho de no haber sido sancionada antes según lo contemplado en el artículo 103 del Decreto 3075 de 1997.

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979 y el artículo 107 del Decreto 3075 de 1997, son las siguientes:

- a) *Amonestación.*
- b) *Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.*
- c) *Decomiso.*
- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por todo lo anterior, es necesario hacerle saber a la implicada que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Luz Eugenia Palacio Tobón** identificada con cédula de ciudadanía No. 21.831.028, en su calidad de **Representante Legal**, o quien haga sus veces, de la **Cafetería Tienda Escolar de la Institución Educativa Rural Técnica Agropecuaria La Herradura** ubicada en la Corregimiento La Herradura del municipio de Armenia, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **CUARENTA (40) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES**, valor que deberá ser cancelado a favor de la **Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia**, en la **cuenta de ahorros del Banco Popular No. 18072008-8** o en la **cuenta de Ahorros del**

Banco de Bogotá No. 38611336-9, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. El comprobante de pago será entregado en la Dirección de Factores de Riesgo para su verificación. De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y **sustentarse** debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los

15 MAY 2012

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA

Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia

RESOLUCIÓN N° 041376

15 MAY 2012

Por medio de la cual se impone una sanción

**EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN FACTORES DE RIESGO
DE LA SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE
ANTIOQUIA**

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las conferidas por los Decretos 1950 de 1964 y 677 de 1995, las Leyes 9ª de 1979, 715 de 2001, Decreto Ordenanza N° 2575 de 2008, la Resolución N° 23483 del 07 de octubre de 2009 y demás normas concordantes,

CONSIDERANDO:

Que Conforme a lo dispuesto en la Ley 715 del 2001, Decretos 1950 de 1964, 677 de 1995, a las Resoluciones 10911 de 1992 y 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social y demás normas concordantes, a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control de los establecimientos farmacéuticos, que fabriquen, distribuyan o vendan productos farmacéuticos, Farmacias, Droguerías Depósitos de Medicamentos, Agencias de Especialidades Farmacéuticas o similares.

Que el día 03 de febrero de 2011, funcionarios adscritos a ésta dependencia practicaron visita oficial de inspección y vigilancia a la **Tienda Naturista Girasoles** ubicada en la Carrera 21 N°20 58 Local 204 del municipio de Yarumal, Antioquia, cuya **Propietaria** es la señora **Yuliana Ríos Valencia** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.040.038.873 y su **Administradora** la señora **Liliana Patricia Cardeño** titular de la cédula de ciudadanía N° 1.042764.355.

Que practicadas las diligencias previas, mediante Auto de Iniciación de Procedimiento radicado con el N° 22886 de noviembre 11 de 2011 se inició la investigación, y se formularon cargos mediante Auto de Cargos radicado con el N° 23158 de diciembre 05 de 2011 contra las señoras Yuliana Ríos Valencia y Liliana Patricia Cardeño en sus calidades de **Propietaria y Administradora de la Tienda Naturista Girasoles**, por infringir el artículo 4 numeral 2 de la Resolución 5109 de 2005 y artículo 272 de la Ley 9 de 1979, artículo 14, 44 parágrafos 1º, 2º y 3º y 45 literales g) y j) del Decreto 2266 de 2004, artículo 9 del Decreto 1737 de 2005, artículo 28 literal d) del Decreto 219 de 1998 y artículo 6 numeral 1 Literales a), c), j) y k) de la Resolución 126 de 2009.

Que dicho auto de cargos fue notificado personalmente a la señora **Liliana Patricia Cardeño**, para que ejerciera su derecho de defensa, respetándole de esta manera su derecho fundamental al debido proceso, ante lo cual presentó los respectivos descargos dentro del término de ley.

Que la señora **Yuliana Ríos Valencia**, quien no acudió a notificarse personalmente, fue notificada por edicto y no presentó sus descargos, dejando inactivo su derecho de defensa.

Que mediante Auto de Pruebas N° 0977 del 09 de mayo de 2012 fueron aceptados como pruebas los documentos aportados por la señora Liliana Cardeño junto con sus descargos.

Para resolver se tiene lo siguiente:

se hallaron en condiciones irregulares y anómalas seis mil quinientas noventa y dos (6.592) unidades de ciento veinticinco (125) productos farmacéuticos, tales como:

- **Fraudulentos:** Sin registro sanitario del INVIMA y se evidenció que adquiría productos a proveedores no autorizados.
- **Que incumplían las normas de calidad en etiquetas, rótulos y empaques:** alimento con indicaciones terapéuticas, sin ubicación del laboratorio, sin clasificación, sin número de lote, sin sistema de seguridad en sus tapas, con etiqueta en idioma extranjero y con dibujos alusivos a tratamiento en su etiqueta.

Todos estos productos fueron decomisados como medida sanitaria de seguridad, y se dejó copia del acta levantada con ocasión de la visita.

Al respecto, los parágrafos primero, segundo y tercero del artículo 44 del Decreto 2266 de 2004, hacen referencia a las etiquetas y empaques de las preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, señalando con notoria claridad:

Parágrafo 1º. En las etiquetas y empaques de las preparaciones farmacéuticas con base en recursos naturales de venta bajo fórmula médica, salvo los casos excepcionales determinados por el Invima, no deben aparecer las indicaciones o usos terapéuticos del producto pero sí la posología, advertencias y las contraindicaciones.

Parágrafo 2º. En el caso de productos importados, la información indicada anteriormente deberá estar en idioma español. Además deberá incluirse el nombre del importador y domicilio y aplica igualmente la prohibición de colocar las indicaciones del producto previsto en el parágrafo primero.

Parágrafo 3º. En las etiquetas del material de envase y empaque no se admitirán dibujos o figuras que induzcan al consumo irracional de estos productos. (Subrayas fuera de texto)

A su vez el 45 de la misma disposición normativa al referirse al contenido de las etiquetas y empaques de los productos fitoterapéuticos tradicionales. Señala que las mismas deberán contener la siguiente información:

g) Número de registro sanitario;

j) Número de lote;

En cuanto a los productos sin registro sanitario, se les recuerda que dicho registro, es el Documento Público expedido por el INVIMA o la autoridad delegada, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en la normatividad sanitaria, por lo tanto los productos que no cuentan con éste y encontrados son fraudulentos y está prohibida su tenencia.

Además es responsabilidad precisamente de quienes a ello se dedican, no sólo adquirir los productos y medicamentos a proveedores legalmente autorizados, sino revisar de manera meticulosa la mercancía que adquieren para su comercialización ya que lo que está de por medio es la salud pública, el bienestar colectivo y la propia vida de quienes requieren los productos para el alivio o la cura de sus diversas dolencias o enfermedades, como lo establece el artículo 6 literal c) de la Resolución 126 de 2009:

Los responsables de las tiendas naturistas deben asegurarse que los proveedores o distribuidores de los productos que venden se encuentran debidamente autorizados para la distribución de los mismos.

Las condiciones higiénico locativas del establecimiento tampoco eran las adecuadas, toda vez que se evidenciaron las siguientes irregularidades:

- Faltaban estibas.
- Los basureros no contaban con tapa.
- No cumplía con el código de colores en recipientes y bolsas plásticas.
- No contaba con los elementos necesarios: termómetros e higrómetro, para medir las variables de temperatura ambiental y humedad relativa.

Igualmente, no contaba Certificado de uso de suelos, expedido por Planeación municipal ni con Certificado Mercantil. Así como tampoco, se tenían implementados los procesos y procedimientos que se realizan en el establecimiento

Resulta relevante para este despacho además que se encontraron medicamentos homeopáticos y productos fitoterapéuticos de venta con fórmula médica, los cuales no están permitidos en este tipo de establecimientos.

ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS

La señora Liliana Patricia Cardeño, en su calidad de administradora del establecimiento, manifiesta dentro del escrito de descargos que la tienda naturista fue liquidada en su totalidad, aportando la documentación que soporta ésta afirmación.

Así mismo, asegura la implicada que ella era dependiente y asalariada y que la propietaria del establecimiento era la señora Mónica Beatriz Cardeño y que por lo tanto ella debe ser exonerada de los cargos. Frente a lo cual es pertinente señalar que si bien es cierto en la documentación aportada aparece como propietaria del establecimiento la señora Mónica Beatriz Cardeño, durante la visita la señora

Liliana Patricia Cardeño manifestó a los funcionarios que practicaron la visita que la propietaria era la señora Yuliana Ríos Valencia y que la encargada de manejar los productos y el establecimiento era ella misma, información que no fue posible verificar toda vez que el establecimiento no contaba con certificado mercantil y la señora Yuliana Ríos no estuvo presente durante la visita.

De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con la documentación allegada por la señora Liliana Patricia Cardeño, no existen argumentos suficientes ni pruebas contundentes que indiquen que la señora Yuliana Ríos Valencia efectivamente era la propietaria del establecimiento, al momento en que los funcionarios realizaron la visita, motivo por el cual es pertinente para este despacho exonerar de todo tipo de responsabilidad administrativa a la señora Yuliana Ríos Valencia identificada con cedula de ciudadanía N° 1'040.038.873 quien fue vinculada al presente proceso administrativo sancionatorio en su calidad de propietaria de la Tienda Naturista Girasoles del municipio de Yarumal y de lo cual no es posible tener certeza.

Es de señalar que las irregularidades encontradas en el establecimiento y por las cuales se adelantó la presente investigación corresponden a actividades propias de la propietaria y/o administradora del mismo, es por esto por lo que sólo se procederá a sancionar a la señora Liliana Patricia Cardeño quien se desempeñaba como administradora de la Tienda Naturista Girasoles, tal como fue evidenciado por los funcionarios que practicaron la visita y como la misma señora Cardeño lo afirmó durante la misma y de lo cual se dejó constancia dentro del acta de visita.

Frente a todo lo anterior, los artículos 48 y 49 de la Constitución Política establecen la obligación del Estado de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio público de seguridad social, lo que se hará de acuerdo con la ley, y además garantizan a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, estableciendo que *"toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y el de su comunidad"*.

También por expreso mandato constitucional (artículo 334), el Estado tiene que intervenir en todos los renglones de la economía, lo cual incluye la *"producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados..."* Y es precisamente en desarrollo de ese mandato que se expidieron, entre otras normas legales, la Resolución 010911 de 1992 del Ministerio de Salud (hoy de la Protección Social), la Ley 100 de 1993, el Decreto 677 de 1995, y la ley 715 de 2001, toda vez que conforme al Preámbulo de la Carta, y al artículo 366, el nuestro es un país que se fundamenta en *"la prevalencia del interés general"*, y *"el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación..."*

Todas las normas referenciadas, no son otra cosa que parte del desarrollo legislativo del artículo 78 de la Constitución Política, que protege de manera expresa los derechos colectivos de todos los habitantes del país, y que textualmente reza:

"La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios" (Negrilla fuera de texto).

La escala de sanciones administrativas establecidas en las normas referidas inicialmente, y de manera particular en el artículo 577 de la Ley 9ª de 1979, son las siguientes:

- a) Amonestación.
- b) Multas hasta por una suma equivalente a DIEZ MIL (10.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES.
- c) Decomiso.

- d) *Suspensión o cancelación del registro o de la licencia respectiva.*
- e) *Cierre temporal o definitivo del establecimiento, laboratorio farmacéutico o edificación o servicio respectivo.*

Por otra parte, el artículo 9º del Código Civil Colombiano, establece que “**La ignorancia de la ley no sirve de excusa**”. Y en tal sentido, en uno de los múltiples pronunciamientos que sobre éste aspecto ha hecho la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena de marzo 30 de 1978, señaló que “*Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora, equivale a establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad constitucional y generador del caos jurídico*”. Se ha hecho ésta reseña legislativa para concluir que bajo ninguna circunstancia le asiste justificación alguna al implicado para pretender evadir su responsabilidad en los hechos.

Tener productos fraudulentos que incumplan normas de calidad en etiquetas, rótulos y empaques, además que algunos se encontraran mal almacenados, pone en riesgo y en grave peligro la salud pública que el estado y en éste caso la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger; además dichas conductas están debidamente tipificadas como infracciones en las normas referidas; y quien incurra en ellas por acción o por omisión, con dolo o por su culpa, se hace acreedor a una sanción.

Es de anotar que de la gran cantidad de visitas que diariamente realizan los funcionarios de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia a los establecimientos farmacéuticos de todo el departamento, en muchos de ellos ni siquiera se encuentra un solo producto en condición irregular, ni son objeto de requerimientos; porque precisamente esa es su obligación legal, garantizar una correcta y adecuada dispensación de medicamentos a la comunidad que los requiera.

Por todo lo anterior, es necesario hacerles saber a las implicadas que el cumplimiento de los requisitos exigidos para el funcionamiento de éste tipo de establecimientos es algo que escapa al simple arbitrio o voluntad de quienes a ello se dedican, toda vez que es un claro y expreso mandato legal al cual tiene que someterse toda persona natural o jurídica que decida hacer de esa su actividad económica, por el alto riesgo social que ello implica, al estar de por medio la salud pública, la buena fé y el bienestar colectivo.

Para concluir, la protección a la salud de la población mediante los procedimientos señalados en las normas citadas, está por encima de cualquier consideración de carácter particular. Tener en un establecimiento productos en las condiciones en que se encontraron en la **Tienda Naturista Girasoles** del municipio de Yarumal, pone en riesgo la salud pública que el estado tiene la obligación constitucional y el deber jurídico de proteger.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Sancionar a la señora **Liliana Patricia Cardeno** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.042764.355, en su calidad de, **Administradora** de la **Tienda Naturista Girasoles** ubicada en la Carrera 21 N°20 58 Local 204 del municipio de Yarumal, Antioquia, con **MULTA** equivalente a **OCHENTA (80) SALARIOS MÍNIMOS DIARIOS LEGALES VIGENTES** al momento de ejecución de la presente decisión, valor que deberá ser cancelado a favor del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, en la **Cuenta de Ahorros No. 430-81076-2 del Banco de Occidente**, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de este acto administrativo. **El comprobante de pago será entregado en la Dirección Factores de Riesgo para su verificación.** De lo contrario, se remitirá al Juzgado de Ejecuciones Fiscales, para el respectivo cobro coactivo

ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de todo tipo de responsabilidad administrativa dentro de la presente investigación a la señora **Yuliana Rios Valencia** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.040.038.873, en calidad de **Propietaria** de la **Tienda Naturista Girasoles** ubicada en la Carrera 21 N°20 58 Local 204 del municipio de Antioquia, por las razones expuestas en apartes anteriores.

ARTÍCULO TERCERO: Inscribir el presente acto administrativo, en el Registro de Propietarios, Administradores y Directores Responsables de establecimientos farmacéuticos de la Dirección Factores de Riesgo de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

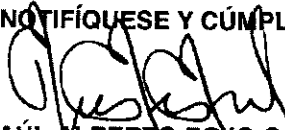
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a los implicados, haciéndoles saber que contra ésta proceden los **Recursos de Reposición** y de **Apelación**, que deberán interponerse y sustentarse debidamente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en la forma y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La sancionada deberá asistir a una capacitación gratuita sobre legislación farmacéutica, dictada por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para lo cual se le estará informando oportunamente el día, la hora y el lugar, enterándole que el cumplimiento de una sanción, no exime a los infractores de la ejecución de una obra o medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

Expedida en Medellín a los **15 MAY 2012**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RAÚL ALBERTO ROJO OSPINA
Director Administrativo Factores de Riesgo
Secretaría Seccional de Salud y protección Social de Antioquia

AUTO

Medellín, **08 JUN. 2012**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Nacional número 1529 del 12 de julio de 1990 y Decreto 1396 del 26 de mayo de 1997, inscribase en el libro respectivo el nombre de la señora **LIBIA DEL SOCORRO RIOS ARISTIZABAL**, identificada con cédula de ciudadanía número 21.336.765, en su calidad de Presidente del Senatus Inmaculada de Medellín como Representante Legal del CONCEJO REGIONAL DE LA LEGION DE MARIA con domicilio en el Municipio de Medellín, quien está facultada para ejercer sus funciones para un período de tres (3) años como consta en Acta número 566 del 17 de febrero de 2012.

Igualmente, inscribir las siguientes designaciones de la Junta Directiva del Senatus Inmaculada de Medellín, así:

Nombre	Cargo	Cédula
Libia del Socorro Ríos Aristizábal	Presidente	21.336.765
Sofía Jaramillo de Betancur	Vicepresidente	22.008.615
Luz Marina Aristizábal Gómez	Secretaria	32.076.472
Luz Elena Correa Rodríguez	Tesorera	

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

N° 161095 1 Vez

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Contractual

AUTO

Medellín, 06 JUL 2012

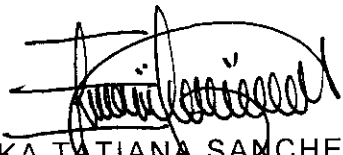
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Nacional número 1529 del 12 de julio de 1990 y Decreto 1396 del 26 de mayo de 1997, inscribáse en el libro respectivo el nombre de la Hermana MARIA EUGENIA PEREZ TABORDA, identificada con cédula de ciudadanía número 32.457.828 como Representante Legal, en su calidad de Abadesa de la COMUNIDAD DE CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS con domicilio en el Municipio de Medellín, quien está facultada para ejercer sus funciones a partir del 12 de marzo de 2012 y hasta el 12 de marzo de 2015.

Lo anterior, tal como lo dispone la Constancia del 1° de junio de 2012 de la Arquidiócesis de Medellín.

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

N° 161098 1 Vez

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Contractual

CONTRATO DE EMPRÉSTITO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA Y PIGNORACIÓN DE RENTAS.

Entre los suscritos, **GILBERTO DE JESÚS GIRALDO BUITRAGO**, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.061.480 expedida en Medellín, quien actúa en su calidad de Representante Legal del **POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CAVAVID**, establecimiento público de Educación Superior del orden departamental, identificado con NIT 890.980.136-6, debidamente facultado(a) para celebrar este contrato de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y en el Acta No. 05 de septiembre 12 de 2011 del Consejo Directivo junto con su correspondiente Adenda del 12 de junio de 2012, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL DEUDOR**, de una parte, y de otra parte **VICTOR ALONSO MUNERA GIL**, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.346.525 expedida en Sabaneta, quien en el presente documento actúa en nombre y representación del **BANCO DE BOGOTÁ S.A.**, persona jurídica constituida como establecimiento bancario, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en su carácter de apoderado especial del mismo, tal como consta en la copia auténtica de la escritura pública No. 2.050 de veinticuatro (24) de febrero de 2009, otorgada en la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D.C. que se anexa a este contrato para que forme parte del mismo y quien en adelante se denominará **EL BANCO**, han convenido celebrar el presente contrato de empréstito, previas las siguientes consideraciones y en los términos que se señalan más adelante

CONSIDERACIONES:

1. Que de conformidad con la Ley 80 de 1993, reformada por la Ley 1150 de 2007, las operaciones de crédito público se contratarán en forma directa.
2. Que el Decreto 2681 de 1993, por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas, establece en su artículo 13 que la celebración de empréstitos internos de entidades territoriales y sus descentralizadas, se rigen por lo señalado en los Decretos 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registro de los mismos en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
3. Que el Consejo Directivo del **POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CAVAVID**, aprobó contraer el endeudamiento con el sector financiero, la celebración del presente contrato de empréstito y la pignoración de las rentas que garantizan su pago, y atender y garantizar el servicio de la deuda durante todo el plazo de amortización del empréstito, tal como consta en el Acta No. 05 de septiembre 12 de 2011 junto con su correspondiente Adenda del 12 de junio de 2012.
4. Que el Rector del **POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CAVAVID** certificó, mediante comunicación de 21 de marzo de 2012, que el empréstito será destinado única y exclusivamente para el(los) siguiente(s) proyecto(s) o destino(s): **PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA**.
5. Que la Directora Financiera **EL DEUDOR** certificó que las rentas que se pignorarán como garantía y fuente de pago de las obligaciones contraídas con la suscripción del presente contrato se encuentran totalmente libres de prenda, pignoración o embargo, conforme lo manifiesta en comunicación de 3 de mayo de 2012.
6. Que de conformidad con el decreto 610 de 2002 la Calificadora de Riesgo Fich Ratings Colombia S.A. acreditó la capacidad de **EL DEUDOR** para contraer el presente endeudamiento.

Con base en las consideraciones anteriores, las partes han decidido celebrar el presente Contrato de Empréstito, bajo la modalidad de crédito de deuda pública interna y pignoración de rentas, por un monto de **DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$16.000.000.000)**, el cual se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO Y CUANTÍA: EL BANCO ha acordado prestar a EL DEUDOR, a título de empréstito con intereses, hasta la suma de **DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$16.000.000.000)**, en la modalidad de crédito de deuda pública interna y pignoración de rentas, suma que entregará a EL DEUDOR al perfeccionamiento de este contrato, una vez se cumplan los requisitos señalados en la cláusula 8 del presente contrato y se haya acreditado su publicación y registro, en los desembolsos requeridos por EL DEUDOR.

SEGUNDA.- PLAZO Y CONDICIONES DEL EMPRÉSTITO: Las condiciones para el presente Contrato de Empréstito son las siguientes: A) **Moneda.** EL BANCO desembolsará a favor de EL DEUDOR el empréstito en moneda legal colombiana y será reembolsado por EL DEUDOR en esta misma moneda. B) **Plazo Total y Amortización.** EL DEUDOR pagará el presente crédito a EL BANCO en un plazo de diez (10) años, con tres (3) años de gracia a capital, contados a partir de la fecha del primer desembolso, en la modalidad de cartera ordinaria, con amortizaciones trimestrales pagadero en VENTIOCHO(28) cuotas trimestrales consecutivas de conformidad con el pagaré respectivo. La amortización a capital se realizará de acuerdo con el siguiente esquema de amortizaciones:

No.	Meses después del Desembolso	Monto de las Amortizaciones
1	39	3.5714%
2	42	3.5714%
3	45	3.5714%
4	48	3.5714%
5	51	3.5714%
6	54	3.5714%
7	57	3.5714%
8	60	3.5714%
9	63	3.5714%
10	66	3.5714%
11	69	3.5714%
12	72	3.5714%
13	75	3.5714%
14	78	3.5714%
15	81	3.5714%
16	84	3.5714%
17	87	3.5714%
18	90	3.5714%
19	93	3.5714%
20	96	3.5714%
21	99	3.5714%
22	102	3.5714%
23	105	3.5714%
24	108	3.5714%
25	111	3.5714%
26	114	3.5714%
27	117	3.5714%
28	120	3.5722%

C) **Intereses remuneratorios.** Durante el plazo EL DEUDOR pagará sobre los saldos adeudados de capital bajo el presente Contrato de Empréstito, intereses corrientes por trimestre vencido liquidados a la tasa DTF + 4.60% (T.A.) certificada por el Banco de la República, o la entidad que haga sus veces. El interés así estipulado se convertirá en su equivalente trimestre vencido con modalidad de pago trimestre Vencido. El interés se ajustará teniendo en cuenta la DTF vigente – o *la tasa que la reemplace* – a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, incrementado en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente indicados y se pagarán el día del vencimiento o el día hábil siguiente, en caso de que el día del vencimiento no corresponda a un día hábil. Los intereses remuneratorios serán calculados con base en meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360). La tasa DTF será la definida en el artículo 1º. de la Resolución 17 de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República D) **Intereses moratorios.** Si el pago del capital adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, EL DEUDOR reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto del capital en mora y por cada día de retardo, desde el día de la mora y hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente, a la tasa máxima permitida por la ley, sin perjuicio de las correspondientes acciones legales de cobro. E) **Desembolso.** EL DEUDOR, al perfeccionamiento de este contrato y una vez haya acreditado su publicación y correspondiente registro, podrá solicitar uno (1) o varios desembolsos de los recursos objeto del presente Contrato de Empréstito, siempre y cuando sean solicitados por **EL DEUDOR** dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del presente Contrato. Pasado este plazo, **EL BANCO** no tendrá obligación de realizar desembolso alguno, situación que las partes aceptan. **PARÁGRAFO:** EL DEUDOR otorgará un pagaré a favor de **EL BANCO** por cada desembolso que reciba en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, en el cual se hará constar, entre otros, las condiciones financieras tales como: cuantía, la tasa de interés, forma de amortización y vencimientos, y fechas de pago de las cuotas de capital e intereses, de acuerdo con las estipulaciones consignadas en este contrato y conforme al modelo que aparece como Anexo No. 1 del presente Contrato de Empréstito. F) **Prepago.** EL DEUDOR en cualquier momento de la vigencia del presente Contrato de Empréstito podrá prepagarlo total o parcialmente y, **EL BANCO** no podrá cobrar penalización, prima o costo adicional siempre y cuando el prepago sea comunicado a **EL BANCO** con treinta (30) días como comunes de antelación a la fecha del prepago respectivo.

TERCERA.- DESTINACION: Los recursos desembolsados por **EL BANCO** en desarrollo del presente Contrato de Empréstito serán destinados por **EL DEUDOR** única y exclusivamente para los proyectos o destinos indicados en el numeral 4 de las Consideraciones.

CUARTA.-GARANTÍA Y FUENTE DE PAGO: Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de pago adquiridas en virtud del presente Contrato de Empréstito **EL DEUDOR**, además de comprometer su propia responsabilidad, debidamente autorizado por los órganos competentes, a través del presente contrato pignora irrevocablemente a favor de **EL BANCO** las rentas denominadas “**ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**”, en cuantía igual al 120% del servicio de la deuda del Contrato de Empréstito y durante la vigencia del mismo.

Dado que las rentas pignoradas están especialmente afectando el pago del presente Contrato de Empréstito hasta la cancelación total de las obligaciones de pago derivadas del mismo, **EL DEUDOR** se obliga a abrir y mantener en la oficina _centro comercial SantaFé (393) de **EL BANCO**, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato y en todo caso antes del primer desembolso, una cuenta de manejo de garantía, en adelante **la cuenta de garantía**, la cual permanecerá vigente hasta la cancelación total de las obligaciones de pago a cargo de **EL DEUDOR** y a favor de **EL BANCO** derivadas del Contrato de Empréstito, a la cual se transferirá o consignará dentro de los cinco (5) primeros días comunes de cada mes y durante todo el tiempo que haya algún saldo pendiente derivado del Contrato de Empréstito, el ciento cincuenta por ciento 150% del servicio periódico de la deuda del contrato de empréstito, hasta lograr y mantener el tope de la garantía.

Para efectos de lo anterior y como requisito previo al desembolso, **EL DEUDOR** autoriza irrevocablemente a **EL BANCO** para debitar de la cuenta de la garantía las sumas necesarias para atender el porcentaje convenido para cubrir el servicio periódico del empréstito, a medida que los intereses o las cuotas de amortización se hagan exigibles, sin que por razón de la presente autorización **EL DEUDOR** se libere de la obligación de hacer directa y oportunamente los respectivos

pagos, en caso que los dineros consignados sean insuficientes para cubrirlos. Además, **EL DEUDOR** autoriza de manera expresa e irrevocable a **EL BANCO** a deducir, aplicar, debitar y retener los ingresos o depósitos que reciba por concepto de la(s) renta(s) pignorada(s) de la cuenta antes mencionada, las sumas que **EL DEUDOR** le deba a **EL BANCO** por razón del crédito otorgado. La constitución de la prenda no exime a **EL DEUDOR** del cubrimiento total y oportuno de todos los pagos a que esté obligado por el presente Contrato de Empréstito.

Mensualmente a partir del primer desembolso, la (s) entidad(es) recaudadora depositara(n) una suma no inferior a la tercera parte del 120% de la cuota por intereses del presente contrato de empréstito que se deba pagar en el correspondiente periodo; a partir del 36 mes la (s) entidad(es) recaudadora depositara(n) una suma no inferior a la tercera parte del 120% de la cuota por intereses y capital del presente contrato de empréstito que se deba pagar en el correspondiente periodo. **EL DEUDOR** autoriza al **BANCO** para debitar de la cuenta el dinero y aplicará los recursos necesarios para atender el servicio de la deuda (Capital e intereses). Si el **DEUDOR** se encuentra al día en el pago de las cuotas por intereses y capital, y además existe suficiente provisión de recursos para atender la cuota del respectivo periodo, el excedente podrá ser retirado por **EL DEUDOR** previa solicitud escrita de éste, la cual deberá ser aprobada de forma expresa por el **BANCO**.

Como consecuencia de la pignoración de los recursos, **EL DEUDOR** tendrá restricción en el manejo de la cuenta hasta el monto del valor de las cuotas. **EL DEUDOR** no podrá disponer de los dineros depositados en la cuenta sin el previo consentimiento escrito de **EL BANCO**. **EL BANCO** enviará a **EL DEUDOR** mensualmente y mientras esté vigente el presente Contrato de Empréstito, un extracto de la cuenta para su aprobación o para que se formulen las observaciones a que haya lugar. Si en el término de quince (15) días contados a partir de la fecha de expedición del extracto, **EL BANCO** no recibiere observaciones relativas al movimiento de la cuenta, se entenderá que **EL DEUDOR** le ha impartido su aprobación, salvo error manifiesto, y por consiguiente aquél quedará libre de responsabilidad por este concepto. La constitución de esta garantía no exime a **EL DEUDOR** del cubrimiento total y oportuno de todos los pagos a que esté obligado por este Contrato de Empréstito. **EL DEUDOR** se obliga a entregar trimestralmente a **EL BANCO** un certificado suscrito por el Tesorero de **EL DEUDOR**, que evidencie el valor total de las rentas que se perciban por concepto del “**ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**”.

Con la suscripción del presente contrato y con la pignoración de las rentas aquí referida, **EL DEUDOR** se compromete a informar a sus usuarios sobre la obligatoriedad de consignación de las rentas correspondientes en la cuenta pignorada.

Cualquier modificación en las condiciones de los mecanismos o de la fuente de pago de las obligaciones contraídas con la suscripción del presente contrato, deberá ser aprobada por escrito previamente por **EL BANCO**.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si las rentas dadas en prenda por **EL DEUDOR** son embargadas, se le otorga una destinación distinta a atender el servicio de la deuda, o si disminuyen o desaparecen por cualquier causa en forma tal que no alcanczare a cubrir el 120% del servicio de la deuda del Contrato de Empréstito o si por disposición de autoridad competente se extingue, **EL DEUDOR** se compromete a sustituirla a satisfacción del **BANCO** por otra renta que mantenga cubierto el préstamo con la misma solidez de la renta disminuida o extinguida, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud de **EL BANCO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía que por este contrato se constituye se extiende a sus prórrogas, novaciones, ampliaciones y modificaciones. **EL DEUDOR** declara que la garantía aquí prevista asegurará no solamente el pago del monto del presente contrato, sino también de sus intereses durante el plazo o la mora, y si fuere el caso, gastos de cobro judicial o extrajudicial debidamente acreditados, y que la misma permanecerá vigente hasta cuando exista algún saldo a su cargo y a favor de **EL BANCO** por cualquiera de estos conceptos.

PARÁGRAFO TERCERO: **EL DEUDOR** se obliga a dejar constancia expresa en su presupuesto y en todos los documentos en que por Ley se refieran a las rentas denominadas “**ESTAMPILLA POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID**” de la pignoración que por el Contrato de Empréstito se constituye, así como su cuantía y la denominación de la inversión financiada con el

Contrato de Empréstito. **EL DEUDOR** declara que la renta pignorada tiene como objetivo financiar el mismo sector al cual están destinados los recursos del Contrato de Empréstito, que dicha pignoración no excede los montos asignados a dicho sector de inversión durante la vigencia del crédito y que la misma se encuentra libre de otros gravámenes.

PARAGRAFO CUARTO: **EL BANCO** queda facultado para solicitar a **EL DEUDOR** todos aquellos documentos financieros que considere necesarios para determinar y controlar la existencia y niveles exigidos para el gravamen constituido a su favor.

PARAGRAFO QUINTO: Deberá entenderse que la renta pignorada constituye garantía y fuente pago de las obligaciones contraídas con el presente Contrato de Empréstito y, por lo tanto, **EL DEUDOR** no podrá hacer giros de la Cuenta en forma autónoma y libre contra ellas, cuando no se hayan garantizado los mínimos aquí exigidos o cuando no se haya garantizado la cancelación de la cuota correspondiente al período, así como a partir del día quince (15) siguiente a la fecha en que se encuentre en causal de incumplimiento de las obligaciones de pago garantizadas con la renta pignorada en virtud de este contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Si con la expedición de normas posteriores a la celebración de este contrato se modificare el mecanismo de liquidación, cobro, pago, o transferencia de las rentas pignoradas, de forma tal que corresponda a **EL DEUDOR** la realización de actos conducentes a su cobro, **EL DEUDOR** autoriza desde ahora y da poder a **EL BANCO** para que en su nombre realice las gestiones a que hubiere lugar, ante quien corresponda.

QUINTA.- DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE PAGOS: Las partes acuerdan que los pagos que efectúe **EL DEUDOR** a **EL BANCO** se aplicarán en el siguiente orden: intereses moratorios si los hubiere, a intereses corrientes, amortizaciones de capital y, por último, al prepago de la obligación. En caso de cobro judicial serán a cargo de **EL DEUDOR** las sumas que determine el juez competente. Si el cobro es extrajudicial, para su pago **EL BANCO** presentará a **EL DEUDOR** una relación detallada y justificada de los gastos respectivos.

SEXTA.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS: En el evento en que la fecha de cualquiera de los pagos a que se refiere el presente contrato de empréstito coincida con un día no hábil Bancario, el pago se trasladará al día hábil bancario inmediatamente siguiente, sin que por este hecho se cause prima, multa o costo adicional a cargo de **EL DEUDOR**.

SÉPTIMA.- DESEMBOLSO: El desembolso de la totalidad de los recursos objeto del empréstito se efectuará de conformidad con el siguiente procedimiento:

1. **EL DEUDOR** solicitará por escrito el desembolso del empréstito a **EL BANCO**, mínimo con tres días (3) hábiles bancarios de antelación a la fecha en que el mismo se requiera, indicando la cuenta o cuentas en que las que el dinero deba ser abonado.
2. Previo a cada desembolso, **EL DEUDOR** suscribirá un pagaré a favor de **EL BANCO**, en donde se establecerá la forma de pago
3. Una vez comunicado, **EL BANCO** se obliga a abonar el dinero en la fecha indicada para el desembolso por **EL DEUDOR** en la entidad financiera y número de cuenta que designe el **DEUDOR**.

OCTAVA.- REQUISITOS PREVIOS AL DESEMBOLSO: Las partes han convenido que para que **EL BANCO** pueda realizar el primer desembolso en desarrollo del presente contrato de empréstito, es necesario que **EL DEUDOR** anexe los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral del presente Contrato de Empréstito:

- a. Solicitud de desembolso de los recursos.
- b. Firma de los correspondientes pagarés.
- c. Constancia del registro del presente Contrato de Empréstito en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- d. Orden de publicación en la Gaceta Oficial o medio dispuesto por **EL DEUDOR** para dar publicidad a los contratos celebrados por los entes de su jurisdicción.
- e. Acta de posesión en el cargo del Rector.
- f. Certificado de existencia y representación legal del **DEUDOR**.

- g. Copia de las actas de autorización del empréstito y de las garantías, expedidas por el Consejo Directivo.
- h. Documentos que acreditan el nombre, la posesión y las autorizaciones otorgadas a quien firma el presente documento en nombre de **EL DEUDOR**.
- i. Certificación suscrita por el Director Financiero de **EL DEUDOR** acerca de la libertad, suficiencia y destino de las rentas pignoradas como garantía de pago del empréstito.
- j. Certificación del destino del crédito expedida por el Rector, debidamente firmada y fechada
- k. Perfeccionamiento de la garantía convenida, si fuere el caso.
- l. Calificación de riesgo emitida por una calificadora de Valores autorizada por la Superintendencia Financiera.

PARAGRAFO – Las partes han convenido que para que **EL BANCO** pueda realizar los demás desembolsos en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, **EL DEUDOR** se compromete a firmar el respectivo pagaré por cada uno de los desembolsos.

NOVENA.- OBLIGACIONES DEL BANCO: **EL BANCO** se obliga a lo siguiente:

1. Abonar a la cuenta y entidad financiera designada por **EL DEUDOR**, los recursos solicitados por éste, en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
2. Informar vía fax o correo electrónico a **EL DEUDOR** sobre el abono de los recursos relacionados con el desembolso a su cargo, en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
3. Suministrar la información relacionada con este contrato que requiera **EL DEUDOR**, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su solicitud, y atender cualquier requerimiento relacionado con el empréstito dentro del término señalado anteriormente.
4. Devolver a **EL DEUDOR** los pagarés junto con las respectivas notas de cancelación, una vez **EL DEUDOR** haya restituido el monto desembolsado y sus intereses, conforme a lo estipulado en el presente contrato de empréstito.

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL DEUDOR: **EL DEUDOR** se obliga en los términos del presente Contrato de Empréstito a realizar los siguientes actos:

1. Suscribir los pagarés a favor de **EL BANCO**, de conformidad con lo señalado en el presente Contrato.
2. A través del mecanismo de pago definido en este contrato, pagar a **EL BANCO** los montos desembolsados junto con sus intereses, según las condiciones de amortización y pago consagradas en este Contrato de Empréstito.
3. Adelantar, durante toda la vigencia del Empréstito, los trámites que se requieran para asegurar la existencia y operatividad del mecanismo de pago pactado en este contrato, en los términos y condiciones previstos en el mismo, sin perjuicio de efectuar los pagos en los términos convenidos en los respectivos pagarés.
4. Constituir la Pignoración de Rentas como garantía y fuente de pago del crédito convenido.
5. Mantener el recaudo y/o depósito de los recursos pignorados a través de cuentas bancarias de **EL BANCO DE BOGOTÁ**.
6. Registrar el presente Contrato de Empréstito en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Registrar el presente Contrato de Empréstito ante la Contraloría Municipal, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Resolución Orgánica 5544 de 17 de diciembre de 2003, modificada por la resolución orgánica 5993 del 2 de octubre de 2008, expedidas por la Contraloría General de la República.
8. Mantener los indicadores de gestión y los índices que demuestran su capacidad de pago y endeudamiento dentro de los límites señalados por la ley.
9. Informar previamente por escrito a **EL BANCO** la contratación de nuevos empréstitos, cuando con el nuevo crédito solicitado se exceda el máximo endeudamiento existente al momento del desembolso del último crédito autorizado por **EL BANCO**.
10. Informar a **EL BANCO**, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia, cualquier efecto material adverso, entendiéndose por tal, todo hecho que tenga un efecto significativamente adverso sobre la situación jurídica, administrativa o financiera de **EL DEUDOR** que afecte o pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones de pago contraídas en desarrollo del presente Contrato de Empréstito.
11. Incorporar al presupuesto y a las respectivas cuentas de tesorería, los recursos que se obtengan como producto del crédito así como la pignoración de las rentas ofrecidas en garantía y/o fuente de pago del mismo.

12. **EL DEUDOR** se obliga a mantener informado a **EL BANCO** de su situación financiera, en desarrollo de esta obligación, presentará a **EL BANCO** la siguiente información:
 - A. Estados financieros y presupuesto de la vigencia de **EL DEUDOR** dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su aprobación.
 - B. Un informe sobre el estado de los ingresos pignorados bajo el presente Contrato de Empréstito, en cuanto al valor del recaudo y estado de pignoración del mismo, con corte a cada período de pago de las obligaciones contraídas con el presente contrato, el cual deberá ser presentado trimestralmente dentro de los primeros quince (15) días comunes del mes.
 - C. Un informe sobre el estado de la deuda pública de **EL DEUDOR** y cuentas por pagar, el cual deberá presentar dentro de los primeros noventa (90) días comunes siguientes al fin del período fiscal.
 - D. Copia del informe de cierre de Tesorería, debidamente certificado, el cual deberá presentarse dentro de los sesenta (60) días siguientes al fin del período fiscal.
 - E. Cualquier información que llegue a conocer **EL DEUDOR** sobre la existencia de medidas cautelares que pueda significar un incumplimiento en los pagos de la deuda que se contrae por el presente Contrato de Empréstito, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del hecho.
13. Cumplir con todas las leyes, decretos, reglas, reglamentos y requerimientos aplicables de las autoridades gubernamentales.
14. Incorporar al presupuesto y a las respectivas cuentas de tesorería, los recursos que se obtengan como producto del crédito así como la pignoración de las rentas ofrecidas en garantía y/o fuente de pago del mismo.
15. Presentar al BANCO una evaluación elaborada por una entidad calificadora de riesgo vigilada por la Superintendencia Financiera, que se encuentre vigente, y en la cual conste la capacidad de **EL DEUDOR** para contraer y atender el endeudamiento con el BANCO. Dicha evaluación deberá ser renovada y/o revisada anualmente y los resultados de la misma deberán ser aportados al BANCO en la misma periodicidad.

DÉCIMA PRIMERA.- EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Se consideran eventos de incumplimiento para las partes:

- a. La mora por parte de **EL DEUDOR** en el pago de cualquiera de las cuotas de capital y/o de intereses mayor a 15 días.
- b. El deterioro en las condiciones financieras de **EL DEUDOR**, que pongan en peligro el cumplimiento de las obligaciones de pago del presente Contrato de Empréstito.
- c. Si existen acciones judiciales o administrativas de cualquier naturaleza que afecten sustancialmente la capacidad financiera de **EL DEUDOR**, de modo tal que se imposibilite o impida el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones de pago surgidas de este Contrato de Empréstito.
- d. La no formalización e incumplimiento de la Pignoración de Rentas como garantía y fuente de pago del presente crédito otorgado, dentro del término y las condiciones señaladas para el efecto en este contrato.
- e. Si la renta pignorada es embargada, se le otorga una destinación distinta a atender el servicio de la deuda, si disminuye o desaparece total o parcialmente, cualquiera que sea la causa, de tal forma que ya no sea prenda suficiente del empréstito y **EL DEUDOR** no la sustituye o completa a satisfacción de **EL BANCO** dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud de **EL BANCO**.
- f. El incumplimiento de la obligación de efectuar las apropiaciones presupuestales de las obligaciones del presente Contrato de Empréstito, según lo previsto en la cláusula décima tercera del presente contrato.
- g. La modificación del mecanismo de fuente de pago, incluyendo cualquier orden contraria a las establecidas en el convenio respecto del recaudo de las rentas que representan la fuente de pago del presente Contrato de Empréstito sin la autorización expresa de **EL BANCO**.
- h. Si **EL DEUDOR** varía la destinación del presente Contrato de Empréstito.
- i. El incumplimiento por parte de **EL DEUDOR** de cualquiera de las obligaciones enunciadas en el presente contrato diferentes a pago y que no sean subsanadas en un plazo de quince (15) días contados a partir de la comunicación escrita de **EL BANCO** a **EL DEUDOR**.
- j. La inexactitud de declaraciones enumeradas en la cláusula décima cuarta.

- k. La apertura de investigaciones administrativas, judiciales, penales o de cualquier otra índole contra **EL DEUDOR** o sus representantes o administradores por lavado de activos, por delitos o conductas contra la fe pública o contra la administración pública, por celebración indebida de contratos y en general por delitos o conductas que a juicio del **BANCO** impliquen el deterioro de la capacidad crediticia y de pago o duda fundada sobre la moralidad del **EL DEUDOR**, de sus representantes o administradores.
- l. La adopción de medidas de intervención o toma de control de **EL DEUDOR** que impliquen pérdida de su autonomía administrativa o presupuestal, y que a juicio del **BANCO** impliquen el deterioro de su capacidad crediticia y de pago.
- m. Si los recursos pignoralos como respaldo del pago del crédito dejan de ser recaudados y/o depositados en cuentas bancarias del **BANCO DE BOGOTÁ**.

DECIMA SEGUNDA. VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO Y ACELERACIÓN DEL EMPRÉSTITO: El plazo para el pago de las obligaciones que surgen en virtud del presente Contrato de Empréstito a cargo de **EL DEUDOR** podrá declararse vencido anticipadamente sin necesidad de requerimiento judicial previo, en caso de presentarse mora mayor a quince (15) días en el pago por parte de **EL DEUDOR** de cualquiera de los montos que por concepto de capital y/o intereses **EL DEUDOR** deba pagar a **EL BANCO** en desarrollo del presente Contrato de Empréstito, de acuerdo con los términos y condiciones previstos en el esquema de amortizaciones. Igualmente, dará lugar al aceleramiento del término del presente Contrato de Empréstito, el incumplimiento de las condiciones dispuestas en los literales b, c, d, e, g, h, i, k, l, m de la cláusula décima primera del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez tomada la decisión de declarar la aceleración del plazo en los términos arriba mencionados, **EL BANCO** deberá notificar por escrito a **EL DEUDOR** de dicha situación, con por lo menos cinco (5) días calendario de antelación a la fecha en que se entenderá declarado el vencimiento anticipado del plazo. Se entenderá que se efectuó la notificación por escrito con la simple radicación del oficio correspondiente en la dirección que se fija para tal efecto en la cláusula vigésima Cuarta del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez sea notificada por escrito la declaración de aceleración del plazo del empréstito por **EL BANCO**, en las condiciones establecidas en la presente cláusula, **EL BANCO** quedará en libertad de iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que considere pertinentes.

PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de lo dispuesto en esta cláusula, a partir de la fecha en que sea declarado el vencimiento del plazo de manera anticipada, **EL DEUDOR** deberá cancelar los intereses que se generen por la mora sobre la totalidad del capital adeudado.

DÉCIMA TERCERA.- APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Los pagos que se obliga **EL DEUDOR** a efectuar en virtud del presente Contrato de Empréstito, están subordinados a las apropiaciones que para el efecto se hagan en su presupuesto. **EL DEUDOR** se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de la deuda que genera el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA.- DECLARACIONES DEL DEUDOR: **EL BANCO** suscribe el presente contrato, en consideración a las siguientes declaraciones que efectúa **EL DEUDOR** a la firma del presente Contrato de Empréstito:

- a) **Estatus:** **EL DEUDOR** es un Establecimiento Público de Educación Superior válidamente existente y regulado por las leyes de Colombia, debidamente autorizado por la ley, las autoridades y los órganos colegiados competentes para celebrar el presente Contrato de Empréstito y pignorar las rentas que lo respaldan. Declara, igualmente, que los recursos a los que hace referencia el presente Contrato de Empréstito sólo se emplearán en la destinación señalada en este contrato.
- b) **Autorizaciones:** **EL DEUDOR** tiene todas las autorizaciones, registros y permisos legales, administrativos, gubernamentales y cualesquiera otras autorizaciones o permisos requeridos para:
 - 1) Permitirle legalmente el cumplimiento de sus obligaciones de pago para con **EL BANCO** en relación con el presente Contrato de Empréstito y la celebración y ejecución del Contrato de Empréstito y la pignoración de rentas que lo respalda.
 - 2) Declara que las obligaciones de pago son válidas, legalmente obligatorias y vigentes.
 - 3) Asegura que las personas que celebren y ejecuten

este contrato en nombre del **DEUDOR** han sido debidamente autorizadas por los órganos pertinentes para la celebración del Contrato de Empréstito, para firmar los títulos de deuda, las notificaciones, comunicaciones y certificaciones en conexión con éste, 4) Asegura que los términos y condiciones de este contrato no desconocen las leyes aplicables ni viola otras obligaciones o contratos celebrados. c) **Obligaciones vinculantes:** Las obligaciones que asume **EL DEUDOR** en desarrollo del presente contrato y en los títulos de deuda son obligaciones legales y valederas de acuerdo a los términos del mismo. d) **No violación a las leyes ni a otros acuerdos:** La ejecución de este contrato y cualquier otro documento ejecutado o a ser ejecutado bajo este contrato y el cumplimiento del mismo no contravienen ninguna ley vigente u otra regulación ni ningún otro contrato, convenio o endeudamiento. **EL DEUDOR** declara que se encuentra en capacidad para celebrar el presente Contrato de Empréstito, en los términos de la ley 358 de 1997 y 617 de 2000. e) **EL DEUDOR** no está incumpliendo contratos celebrados con terceras personas ni existen reclamaciones ni procesos en su contra con relación a dichos contratos, de tal manera que tuvieran o pudieran tener un efecto adverso sobre su habilidad para cumplir sus obligaciones de pago bajo el presente Contrato de Empréstito. f) **Información completa verdadera y exacta:** El deudor declara que a) Toda la información suministrada por **EL DEUDOR** a **EL BANCO** es verdadera, completa y exacta en todos sus aspectos materiales y a la fecha de la entrega de la misma no tiene conocimiento de ningún hecho material o datos que no se hayan divulgado a **EL BANCO** que si fueren divulgados pudieren tener un efecto adverso en la decisión de **EL BANCO** de celebrar la presente operación con **EL DEUDOR**; b) Que no tiene procesos de ninguna naturaleza que de ser fallados en su contra pueden conducir al incumplimiento de las obligaciones de pago adquiridas bajo el presente Contrato de Empréstito ni de sanciones que puedan producir el mismo efecto. **EL DEUDOR** se compromete a partir de la fecha de firma de este contrato a: 1) Inmediatamente notificar a **EL BANCO** sobre cualquier litigio, arbitramento, demanda, requerimiento administrativo o decisión en contra cuyas pretensiones y/o condena equivalgan individual o conjuntamente al diez por ciento (10%) del presupuesto de la correspondiente vigencia fiscal, 2) Informar a **EL BANCO** la posesión de un nuevo Representante Legal de la entidad territorial o su cambio. g) **EL DEUDOR** entiende los términos y condiciones del presente Contrato de Empréstito y los desembolsos a realizar en desarrollo del mismo y desea asumir las obligaciones establecidas con respecto a los mismos.

DÉCIMA QUINTA.- AUTORIZACIONES: **EL DEUDOR**, en ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política, en cumplimiento de la ley de habeas data (ley 1266 de 2008) y con el fin de permitir el derecho a la información de que trata el artículo 20 por parte del acreedor, autoriza de manera irrevocable, escrita, expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, a reportar y consultar la información comercial, crediticia, financiera y de servicios de la cual soy titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen), mi comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis hábitos de pago, y aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito, sea en general administrada y en especial: capturada, procesada, operada, verificada, transmitida, usada y consultada por las personas autorizadas expresamente por la ley 1266 de 2008, incluidos los Usuarios de la Información. Con estos mismos alcances, atributos y finalidad autorizo expresamente para que tal información sea reportada a las Bases de Datos operada por CIFIN, DATA CREDITO y cualquier otra entidad que cumpla las funciones de Operador de Bases de Datos.

De la misma manera autorizo a CIFIN, DATA CREDITO, y cualquier otra entidad que cumpla las funciones de Operador de Bases de Datos que tenga una finalidad estrictamente comercial, financiera, crediticia y de servicios, para que consulte, procese, opere y administre la información de la cual soy titular, y para que la misma sea transmitida a los Usuarios, que tengan la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene el BANCO DE BOGOTÁ.

Certifico que los datos personales suministrados por mí, son veraces, completos, exactos, actualizados, reales y comprobables. Por tanto, cualquier error en la información suministrada será de mi única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera al BANCO DE BOGOTÁ de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas. Lo anterior, con independencia de los deberes y obligaciones que le corresponden como destinatario de la Ley de Hábeas Data

Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente autorización, y acepto la finalidad en ella descrita y las consecuencias que se derivan de ella

DÉCIMA SEXTA.- LEY Y JURISDICCIÓN: El presente Contrato de Empréstito se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República de Colombia; cualquier arreglo, litigio, acción o proceso relacionado con su cumplimiento, deberá adelantarse en los términos y condiciones de la ley colombiana o entablarse ante las autoridades judiciales competentes de la República de Colombia.

DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL BANCO declara bajo juramento, que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la Ley.

DÉCIMA OCTAVA.- NULIDAD O ILEGALIDAD DE DISPOSICIONES: En el evento en que una autoridad competente determine que cualquier estipulación contenida en este Contrato es nula, inválida o ineficaz, las demás estipulaciones del mismo continuarán vigentes y serán objeto de cumplimiento y ejecución, salvo que de conformidad con el artículo 902 del Código de Comercio aparezca que las partes no habrían celebrado el presente Contrato sin la estipulación o parte viciada de nulidad.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES: El presente contrato de empréstito no podrá ser modificado, salvo mutuo acuerdo escrito entre las partes.

VIGÉSIMA.- REGISTRO: Previo al primer desembolso del presente Contrato de Empréstito EL DEUDOR deberá remitir una fotocopia del presente Contrato de Empréstito, solicitando a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público su inclusión en la Base de Datos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 185 de 1995 (Modificado por el Artículo 13 de la Ley 533 de 1999).

VIGÉSIMA PRIMERA.- IMPUESTOS: EL DEUDOR deberá hacer todos los pagos de capital, intereses, de acuerdo con el Contrato de Empréstito, directamente a favor de EL BANCO, libres de todo impuesto, retención o deducción de cualquier naturaleza. En caso que EL DEUDOR esté obligado, en virtud de la ley, a realizar cualquier deducción o retención por impuestos, éste deberá pagar dichas cantidades adicionales según sea necesario, con el fin de que EL BANCO reciba la misma cantidad que hubiere recibido si dicha deducción o retención no se hubiere realizado.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- IMPUESTO DE TIMBRE: El presente contrato, así como los pagarés que expida EL DEUDOR en desarrollo del mismo, están exentos del impuesto de timbre, de acuerdo con lo dispuesto en las normas legales que regulan la materia y en especial el numeral 14 del artículo 530 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 8 de la ley 488 de 1998.

VIGÉSIMA TERCERA: CESIÓN: EL BANCO no podrá ceder, endosar o traspasar el presente Contrato de Empréstito ni los pagarés que se suscriban en desarrollo del mismo, sin previo concepto escrito de EL DEUDOR, que no se negará sino por razones válidas.

VIGÉSIMA CUARTA.- COMUNICACIONES: Todo aviso, comunicación o solicitud que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato de Empréstito se hará por escrito y se considerará realizado desde el momento en que se reciba el documento correspondiente por el destinatario en las direcciones que a continuación se indican:

Por EL DEUDOR: Carrera 48 No. 7-151 de la ciudad de Medellín.

Por EL BANCO: carrera 43 A No 9 sur 91

PARÁGRAFO: Cualquier modificación en los datos antes señalados deberá ser comunicada a la otra parte por escrito.

VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes designan como domicilio contractual el municipio de Medellín.

VIGESIMA SÉPTIMA.- DECLARACIONES FINALES En virtud de lo dispuesto por la ley 1328 del 2009 EL DEUDOR manifiesta 1) que ha leído y revisado todas y cada una de las cláusulas del

presente contrato, que conoce y comprende su contenido, cuales son sus deberes y obligaciones, derechos, los costos y gastos inherentes a la operación de Crédito Público y mediante su suscripción acepta el contenido en su integridad, 2) que los costos, gastos, intereses y tarifas que se causan en desarrollo del presente Contrato de Empréstito le han sido informados por **EL BANCO**, que los conoce y acepta, y que ha tenido la oportunidad de compararlos con los de otras instituciones que ofrecen el servicio financiero al que se refiere el presente Contrato de Empréstito; 3) Que le ha sido suministrada una copia del presente contrato, que ha sido informado sobre los órganos y medios de los que dispone para presentar peticiones, solicitudes o reclamos; 4) y que ha recibido una adecuada educación sobre la manera de instrumentar los productos y/o servicios ofrecidos, sobre el mercado y sobre el tipo de actividad que desarrolla **EL BANCO**.

PARAGRAFO: EL DEUDOR declara que le han sido informadas las políticas de cobro prejudicial y jurídico de **EL BANCO**, las cuales igualmente se pueden consultar en Internet, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia.

VIGESIMA SEPTIMA.-PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y requiere para su ejecución de la publicación en la Gaceta Municipal, requisito éste que se entenderá cumplido con la orden de publicación impartida por el **DEUDOR**.

PARÁGRAFO: Los costos de publicación del presente contrato serán asumidos en su totalidad por **EL DEUDOR**.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes que intervienen, en el municipio de Medellín a los (5) días del mes de Julio de 2012.



EL DEUDOR
GILBERTO DE JESUS GIRALDO BUITRAGO

Nº 161096 1 Vez



EL BANCO
VICTOR ALONSO MUNERA GIL

CONTRATO N° 2012SS390041

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE ANTIOQUIA, -MANÁ-.

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

OBJETO: EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR CON MATRÍCULA OFICIAL DE LOS GRADOS PREESCOLAR Y PRIMARIA.

PLAZO: Hasta el 31 de octubre de 2012.

VALOR: \$31.274.317.322

Entre los suscritos a saber, ÁNGELA LUCÍA MOLINA CHICA, identificada con cédula de ciudadanía N°43.040.686 de Medellín, actuando en calidad de Gerente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia – MANÁ de conformidad con el Decreto Departamental N°0010 del 2 de enero de 2012 y debidamente facultada para contratar en

virtud de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 734 de 2012 y Decreto Departamental 0007 de 2012 y que para efectos del presente se denominará **EL DEPARTAMENTO** y ALBERTO DE JESÚS URIBE CORREA, identificado con cédula de ciudadanía N°8.346.555 de Envigado, actuando en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, con NIT 890.980.040-8, nombrado mediante la Resolución Superior 1763 del 13 de marzo de 2012 y que para efectos del presente se denominará **EL CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar el presente contrato interadministrativo de mandato sin representación, previa autorización del Comité Interno de la Gerencia tal como consta en el Acta N°008 del 12 de junio de 2012 y del Comité de Orientación y Seguimiento según Acta N°044 del 15 de junio de 2012, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. El plan de Desarrollo 2012-2015 "Antioquia la más educada", Línea 4 "Inclusión Social", Programa "Antioquia con Seguridad Alimentaria" contempla el subproyecto "Complementación Alimentaria para los niños, niñas y jóvenes menores de 14 años, que incluye la alimentación al escolar como una herramienta de atención integral, para garantizar al escolar y al adolescente con matrícula oficial de los grados preescolar hasta quinto de primaria, priorizando la población desplazada e indígena, no sólo un soporte alimentario sino acciones orientadas a mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los escolares desde el Desarrollo Humano y la Vigilancia Nutricional.
2. La contratación estatal se encamina al cumplimiento de los fines estatales y a garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios públicos a cargo de la administración, fines que se hacen evidentes en el marco de la atención integral al escolar mediante el servicio de complementación alimentaria, con el que se busca garantizar no sólo, el derecho constitucional a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes del Departamento (art. 44 C.Pol), en concordancia con la Ley de Infancia y adolescencia 1098 de 2006 (art. 24), Ley 1176 de 2007 y demás normas complementarias, sino también motivar, fortalecer y lograr la permanencia de los menores en el sistema educativo, mejorando la adquisición de los conceptos, aptitudes, habilidades y destrezas; e implementar una estrategia educativa en hábitos alimentarios adecuados y estilos de vida saludables, con la cual se impacta al menor, a su familia y a la comunidad en general.
3. A fin de garantizar la continuidad y cobertura en la prestación del servicio de Complementación Alimentaria a la población escolar priorizada, EL DEPARTAMENTO, atendiendo las exigencias legales y recomendaciones del Comité Interno y del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación de la Gobernación de Antioquia, procedió a justificar en los Estudios y Documentos Previos, la celebración del presente contrato mediante la modalidad de contratación directa, prevista en el artículo 2º, numeral 4º, literal c) de la Ley 1150 de 2007.
4. Mediante la Resolución N° 052100 del 4 de junio de 2012, EL DEPARTAMENTO justificó en los términos del artículo 3.4.1.1º del Decreto 734 de 2012 la contratación directa.
5. De conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DEPARTAMENTO a "EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN ESCOLAR CON MATRÍCULA OFICIAL DE LOS GRADOS PREESCOLAR Y PRIMARIA", de conformidad con las especificaciones técnicas (Estudios previos y su Anexo Técnico) y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA que hacen parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**2.1 EL CONTRATISTA se obliga a:****Acciones Componente Complementación Alimentaria**

- 1) Ofrecer un servicio en condiciones de calidad, oportunidad y precio, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Gerencia MANÁ para el escolar.
- 2) La elaboración de un plan operativo para ser entregado a la Gerencia MANÁ, donde se especifique la manera de administrar y operar cada uno de los componentes y los mecanismos de coordinación, seguimiento, evaluación y control con los municipios.
- 3) Ejecutar la estrategia de complementación alimentaria de acuerdo a la modalidad de atención –desayunos-, establecidos en los “Lineamientos PAE” del ICBF- Resolución 6054 de 2010 del ICBF
- 4) Elaborar los ciclos de menús de un mínimo de 21 días, con requerimientos para grupos de niños de 7 a 12 años, según lo establecido en los “Lineamientos PAE” del ICBF- Resolución 06054 de 2010 en la minuta patrón teniendo en cuenta el enfoque diferencial de grupos étnicos (Indígenas, afrodescendientes, ROM –gitanos), incluyendo su respectivo análisis nutricional, guía de preparación, listas de intercambio por grupos de alimentos, y teniendo en cuenta la disponibilidad de alimentos, tiempos de cosecha, hábitos y costumbres alimentarias y los costos establecidos para alimentación
- 5) Con el fin de promover la economía local, priorizar la compra de alimentos producidos regionalmente o por las organizaciones de base comunitaria y/o asociación juvenil que suministren los insumos necesarios para la preparación de las raciones alimentarias.
- 6) Elaborar la programación mensual de entrega de alimentos, la cual debe estar basada en la minuta patrón y ciclos de menús, en el número de beneficiarios del respectivo municipio y unidad aplicativa.
- 7) Ejecutar el programa de acuerdo a la asignación de cupos establecidos por la Gerencia MANÁ.
- 8) Realizar las entregas en las cabeceras municipales de acuerdo a los cupos y listas de mercados definidas para cada unidad aplicativa. Dichas entregas deben realizarse previa coordinación del lugar, día y hora con la persona encargada del programa, con el fin de garantizar la entrega oportuna y calidad de los alimentos.
- 9) Presentar las fichas técnicas de los productos que se emplearan en cada municipio participante para su aprobación, los cuales deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 y Resolución 333 de 2011 del MIN Protección Social. En caso de cambiar algún producto o marca durante la ejecución del contrato se deberá solicitar la debida aprobación por la Gerencia MANÁ, presentando todos los documentos que ameriten.
- 10) Realizar seguimiento a los criterios de participación del programa en cada uno de los establecimientos educativos intervenidos, teniendo como referente el Lineamiento Técnico de ICBF aprobado mediante resolución 06054 de 2010, en adelante “Lineamientos PAE”.
- 11) Realizar seguimiento a los proveedores seleccionados para prestar el servicio garantizando, según lo establecido por el decreto 3075 de 1997, la calidad de los alimentos entregados en el programa. En caso de no cumplirse, se generaran planes de mejoramiento, el cual deberá ser verificado por el profesional de campo de acuerdo al tiempo que se establezca para su cumplimiento.
- 12) El contratista deberá recolectar, revisar y consolidar el formato de control de raciones en las unidades aplicativas participantes establecidas por el ICBF, esta información deberá entregarse en medio magnético a la Gerencia MANÁ dentro de los 10 primeros días de cada mes. En caso de que no se implemente, el operador tendrá que suministrarlo y capacitar a los responsables; además digitalizar la información contenida en dichos formatos y hacer seguimiento a la continuidad de los niños, niñas y adolescentes participantes.

- 13) Reportar las bases de datos de los establecimientos educativos participantes del programa según formato del ICBF.
- 14) Consolidar la información de los beneficiarios del programa PAE en el formato único de beneficiario RUB, en el aplicativo suministrado por la Gerencia MANÁ a la estrategia de restaurantes escolares, con la previa coordinación del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional –SISVAN-.
- 15) Publicar en un lugar visible, los ciclos de menús aprobados para cada municipio en material que permita su durabilidad e inmodificabilidad en cada uno de los establecimientos educativos vinculados al programa PAE y alcaldías municipales. Además, cada establecimiento educativo deberá contar con copia de la lista de mercado entregado con sus respectivas cantidades y periodicidad.
- 16) El contratista deberá diligenciar los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación de Antioquia y los establecidos en el marco de la Alianza Gerencia MANÁ-ICBF.
- 17) Orientar el proceso de implementación y/o fortalecimiento de los planes de saneamiento básico de acuerdo a “Lineamientos PAE” y Decreto 3075 de 1997.
- 18) Presentar a la Gerencia MANÁ informes de avance de la ejecución, cuantitativa y cualitativa del contrato de manera mensual en los primeros 5 días de cada mes. Al finalizar el contrato se deberá presentar informe final consolidando toda la información en medio física y magnética. Toda información reportada por el operador debe ser presentada según la normativa vigente de archivo de la Gobernación de Antioquia.
- 19) El operador deberá recolectar en cada Municipio, los primeros 5 días de cada mes, las certificaciones de ejecución del programa firmadas por el Alcalde y la Empleada de Complementación Alimentaria, y además los certificados de recibo a satisfacción de cada unidad aplicativa participante, que debe ser anexo a los informes que sobre la ejecución del contrato el operador debe presentar a la Gerencia MANÁ.
- 20) Responder y acatar las recomendaciones y requerimientos que sobre la ejecución del contrato haga la Gerencia MANÁ.
- 21) Garantizar que se den los créditos correspondientes a las Entidades participantes en el desarrollo del programa en toda actividad que con ocasión del mismo se realice durante la ejecución del contrato, así como en los materiales fijados de forma magnética, electrónica e impresa.
- 22) Presentar mensualmente el cronograma de salida de los profesionales de campo, en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación de Antioquia.
- 23) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social integral, al momento de la presentación de la cuenta de cobro.
- 24) Articular a las actividades realizadas en el restaurante escolar con la formulación y/o fortalecimiento del PRAES (Programa Ambiental Escolar) en las instituciones educativas visitadas.
- 25) Garantizar el pago oportuno a los proveedores, de conformidad con la ejecución de los cupos asignados y los días atendidos, previo diligenciamiento y entrega de los soportes de ejecución por parte de aquellos.

Acciones Componente Desarrollo Humano

- 1) Participar en los comités zonales determinados en el convenio MANA-ICBF, que se realicen durante la ejecución del contrato y en los comités municipales cada tres meses.
- 2) Realizar reuniones subregionales con el personal encargado del programa (ECAS, DLS) PAE al inicio del contrato con el fin de orientar en la implementación del programa y actividades a realizar.
- 3) Realizar reuniones subregionales con los Alcaldes con el fin de presentar un informe de la ejecución del contrato y realizar rendición de cuentas de la prestación del servicio.

- 4) Participar de espacios con los docentes rurales y urbanos con el fin de realizar asesoría y asistencia técnica, frente a la implementación del programa en los establecimientos educativos participantes.
- 5) Realizar seguimiento a una muestra estadísticamente representativa a las unidades de servicio rural y urbano de los municipios participantes del programa, identificando y verificando las condiciones en las que se presta el servicio con relación a lo establecido por el sistema de supervisión del ICBF, y generar planes de mejoramiento con alguna estrategia de seguimiento
- 6) Desarrollar acciones o sesiones educativas con el 100% de los de los escolares participantes del Programa en la zona rural en instituciones con una población menor de 50 niños inscritos en el SIMAT y al 30% de los niños participantes en las zona urbana de las Unidades aplicativas visitadas, enfocados en temáticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, fomento de estilos de vida saludable y enfoque de derechos. Seleccionar instituciones educativas que, de acuerdo con la información suministrada por la Gerencia MANÁ, no hayan sido atendidas con esta estrategia en la ejecución del contrato inmediatamente anterior.
- 7) Desarrollar acciones educativas y/o encuentros con el 100% de de las procesadoras de alimentos de los restaurantes escolares a intervenir.
- 8) Desarrollar acciones o sesiones educativas como mínimo al 15% de los padres, madres o adultos responsables de los escolares participantes en los restaurantes escolares a intervenir.
- 9) Desarrollar acciones o sesiones educativas al 100% de los docentes responsables del programa en los restaurantes escolares a intervenir; en temáticas relacionadas con seguridad alimentaria, organización y participación comunitaria, hábitos alimentarios adecuados y estilos de vida saludable, "Lineamientos PAE".
- 10) Desarrollar acciones o sesiones educativas a ECAS, asociaciones de padres de familia y comités veedores en "Lineamientos PAE", acorde al plan educativo establecido.
- 11) Ejecutar un plan de difusión del programa PAE en los Municipios participantes utilizando los medios de comunicación, tales como emisoras, canales locales de TV, periódicos, parroquias y los demás que haya en los municipios; para lo cual deberá tener en cuenta los parámetros fijados por la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia.
- 12) Diseñar y reproducir una pieza comunicacional (Cartilla, libros para colorear, historietas o portafolios, entre otras que se propongan) que contenga temas relacionados con alimentación del escolar, estilos de vida saludables, tiendas escolares, consumo de frutas y verduras, buenas prácticas higiénicas, manejo del agua, manejo residuos sólidos) previa aprobación de la Gerencia de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia.
- 13) Realizar acciones de detección temprana de malnutrición, reportando de manera inmediata la Dirección Local de Salud de cada Municipio y a la Gerencia MANÁ.

Acciones Componente Vigilancia Nutricional

- 1) Realizar el diagnóstico del estado nutricional de la población participante de los restaurantes escolares a través de a una muestra estadísticamente representativa por subregión. Se deberá seguir la línea técnica establecida por la Gerencia MANÁ.

Acciones Administrativas

- 1) Aplicar todos los instrumentos que permitan realizar el seguimiento, control y evaluación a la implementación de la estrategia en cada municipio, además se debe emplear los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación de Antioquia y los establecidos en el convenio marco 782 MANA-ICBF.
- 2) Presentar a la Gerencia –MANÁ– informes de avance de la ejecución, cuantitativa y cualitativa del contrato de manera mensual los primeros 5 días de cada mes. Al

finalizar el contrato se deberá presentar informe final consolidando toda la información en medio físico y magnético. Toda información reportada por el operador debe ser presentada según la normativa vigente de archivo de la Gobernación de Antioquia.

- 3) Garantizar el pago oportuno a los proveedores, de conformidad con la ejecución de los cupos asignados y los días atendidos.
- 4) Presentar mensualmente el cronograma de salida de los profesionales de campo, en los formatos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación de Antioquia.
- 5) Responder y acatar las recomendaciones y requerimientos que sobre la ejecución del contrato haga la Gerencia MANA.
- 6) Garantizar que se den los correspondientes créditos a las entidades participantes del desarrollo del programa, en toda actividad realizada durante la ejecución del contrato, así como en los materiales fijados de forma magnética, electrónica e impresa.
- 7) Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social integral, al momento de la presentación de la cuenta de cobro.
- 8) Diseñar Plan Operativo que permita medir y verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
- 9) Articular a las actividades realizadas en el restaurante escolar con la formulación y/o fortalecimiento del PRAES (Programa Ambiental Escolar) en las instituciones educativas visitadas.

Generales

- 1) Además de las obligaciones antes enunciadas, el contratista deberá dar estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas por la Gerencia MANA en el anexo técnico, la propuesta presentada y los "Lineamientos PAE" documentos que hacen parte integral del presente documento.

2.2 EL DEPARTAMENTO se obliga a:

- 1) Realizar el seguimiento del desarrollo de cada una de las actividades contempladas para la ejecución de cada uno de los componentes.
- 2) Garantizar el cumplimiento del enfoque metodológico y las acciones de coordinación necesarias para el buen desarrollo del contrato.
- 3) Coordinar con las dependencias municipales, las actividades establecidas para el adecuado desarrollo del contrato.
- 4) Realizar los pagos conforme a la presentación de soportes de la ejecución del contrato y a la forma de pago establecida.
- 5) Asignar por parte de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional -MANA un Supervisor para el contrato.
- 6) Entregar todos los documentos necesarios para que el contratista pueda cumplir con los procesos y procedimientos, definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Departamento de Antioquia.
- 7) Responder las inquietudes y sugerencias recibidas relacionadas con el objeto del contrato.
- 8) Vigilar que los recursos financieros sean invertidos en la ejecución del objeto y las obligaciones del contrato.
- 9) Elaborar y gestionar todos los documentos jurídicos requeridos para la correcta ejecución del contrato.
- 10) Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requieran los contratos en términos de plazos o cualquier otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente
- 11) Exigir previo a cada pago que EL CONTRATISTA se encuentre a paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social y aportes de parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.
- 12) Las demás que se deriven del artículo 5° de la ley 80 de 1993 y la normatividad vigente, tendientes a la correcta ejecución del mismo.

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: Las partes han convenido como valor del presente contrato la suma de **TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M.L (\$31.274.317.322).**

CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato interadministrativo de mandato en el que el contratista deberá adelantar y ejecutar los negocios necesarios para la operación del programa y del presente objeto contractual, se realizará un total de tres (3) desembolsos y un (1) pago final que corresponderá al valor pactado por la Administración, así:

- Un (1) primer desembolso equivalente al 30% del valor total del contrato, previa aprobación del Plan Operativo.
- Cuatro (4) desembolsos mensuales (julio, agosto, septiembre y octubre), cada uno correspondiente al 15% del valor total del contrato y,
- Un (1) pago del 10% del valor total del contrato al finalizar la ejecución del mismo, correspondiente a los costos de administración cobrados por el contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada desembolso y con el fin de avalar cada cuenta de cobro, el contratista deberá presentar un informe acumulativo de las actividades realizadas hasta la fecha de presentación de la misma, de conformidad con las obligaciones establecidas, en medio física y magnética.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá aportar para cada pago acreditación de estar a paz y salvo por concepto de pagos de parafiscales y aportes al sistema de seguridad social.

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA se obliga a constituir una cuenta bancaria y un centro de costos independientes para el manejo y ejecución de los recursos entregados por EL DEPARTAMENTO.

CLÁUSULA QUINTA. PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el día TREINTA Y UNO (31) de OCTUBRE de 2012, a partir de la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN: La Supervisión de este contrato por parte de EL DEPARTAMENTO, estará a cargo de la profesional universitaria DELIA PATRICIA MONSALVE TORO o por quien designe la Gerente de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia –MANÁ-, quien deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 y siguientes de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍAS: De conformidad con el Decreto 734 de 2012, EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA garantía única de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil extracontractual, las cuales deberán amparar en todo caso lo siguiente:

- **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
- **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.

- **CALIDAD DEL SERVICIO:** En cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.
- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** En cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más.

PARAGRAFO PRIMERO. INDEMNIDAD: De conformidad con el artículo 5.1.6° del Decreto 734 de 2012, EL CONTRATISTA se obliga a mantener libre a EL DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

PARAGRAFO SEGUNDO. CONSTITUCIÓN: Las garantías deberán ser constituidas dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. MULTAS: En el evento en que EL CONTRATISTA incurriere en incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas por el presente contrato, pagará a EL DEPARTAMENTO multas sucesivas y proporcionales a los perjuicios ocasionados de hasta el 0.4% del valor total del contrato por cada día de mora, sin que en todo caso esta sobrepase el 5% del valor total del mismo y podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de multas se seguirá el procedimiento dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLÁUSULA NOVENA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales para contratar con el Estado, de las previstas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la materia. La contravención de lo anterior dará lugar a las sanciones de ley.

CLÁUSULA DÉCIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Los gastos que demande la legalización del presente contrato, correrán a cargo de EL CONTRATISTA y los que implique para EL DEPARTAMENTO se hacen con cargo al siguiente compromiso presupuestal:

FONDO	CENTRO GESTOR	POSICION PPTAL	C.D.P	SOLICITUD DE PEDIDO	COMPROMISO	
0-4750	1139	A.14.3.3	3500022948	100294425	No.	Valor
0-4750	1139	A.14.3.3	3500023075	100294425		
0-4750	1139	A.14.3.3	3500023078	100294425	4500029356	\$31.274.317.322

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN: En materia de terminación, modificación e interpretación unilateral, inhabilidades e incompatibilidades y cesión del contrato, se dará cumplimiento a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE PARAFISCALES: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales de la totalidad de las personas a su cargo. Corresponde al supervisor del contrato velar por el estricto cumplimiento de la norma.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con el Departamento de Antioquia. En el evento de no estarlo, EL DEPARTAMENTO podrá compensar el valor de las sumas adeudadas en el desarrollo del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su ejecución se requiere la suscripción, previa expedición del Registro de Compromiso Presupuestal y aprobación de las garantías exigidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: El presente contrato interadministrativo se encuentra sustentado en el literal c) del numeral 4° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el artículo 3.4.2.1.1° del Decreto Reglamentario 734 de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Este contrato se celebra en consideración a las calidades de EL CONTRATISTA, por lo tanto no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, salvo autorización previa y expresa de EL DEPARTAMENTO.

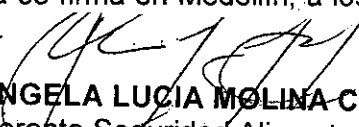
PARÁGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que se trata de un contrato interadministrativo de mandato, el contratista deberá realizar los procesos de selección y negocios necesarios para la ejecución del presente objeto contractual de manera autónoma e independiente; por lo tanto EL DEPARTAMENTO no será parte de los comités evaluadores o demás instancias que el mandatario deba conformar para cumplir con las obligaciones pactadas en el presente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable por la correcta ejecución del contrato o contratos que suscriba con terceros para ejecutar el presente contrato interadministrativo de mandato, por lo tanto EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna obligación ni vinculación laboral, administrativa o de cualquier otra índole con dichos terceros.

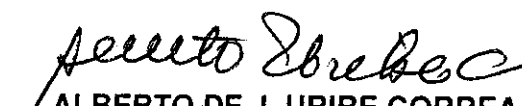
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a no divulgar la información confidencial a la cual tenga acceso con ocasión de este contrato, incluida su etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende con posterioridad a la terminación del contrato y subsistirá mientras la información tenga las características para ser considerada secreta.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales, se entienden incorporados al presente contrato, los siguientes documentos: 1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3500022948, 3500023075, 3500023078; 2) Compromiso Presupuestal N°4500029356; 3) Certificación de paz y salvo por concepto de parafiscales y aportes al SGSS; 4) Acto Justificatorio de la Contratación; 6) Estudios Previos y Anexo Técnico y 7) Propuesta y Plan Operativo aprobado.

Para constancia se firma en Medellín, a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil doce (2012).


ANGELA LUCIA MOLINA CHICA
Gerente Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Antioquia –MANA–
Gobernación de Antioquia

N° 161097 1 Vez


ALBERTO DE J. URIBE CORREA
Rector Universidad de Antioquia

Medellín, 04 JUL. 2012

AUTO

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Nacional número 1529 del 12 de julio de 1990, inscribise en el libro respectivo los siguientes nombres y designaciones de la FUNDACION DEJANDO HUELLA con domicilio en el Municipio de Medellín, y como consta en Acta de Asamblea General Ordinaria realizada el 21 de junio de 2012.


Inscribise el nombramiento de la señora OLGA LUCIA GIL LOPEZ, identificada con cédula 43.567.667 como Representante Legal, en su calidad de Presidente, para un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de su designación, con apego al Artículo 21 de los Estatutos.

Así mismo, anéxese al expediente la documentación relacionada con el nombramiento realizado en Acta de Asamblea General Ordinaria, como Revisor Fiscal al señor JORGE HERNAN ZAPATA SANCHEZ identificado con la cédula número 16.355.083 y Tarjeta Profesional 22904-T, para un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de su elección, y de acuerdo con el Artículo 35 de los Estatutos de la Fundación.

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

N° 161099 1 Vez

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Contractual

AUTO

Medellín, 05 JUL. 2012

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Nacional número 1529 del 12 de julio de 1990, inscribise en el libro respectivo los siguientes nombres y designaciones de la CORPORACION CREANDO FUTURO, con domicilio en el Municipio de Medellín.

Teniendo en cuenta el Acta número 13 de Asamblea General del 25 de junio de 2012, inscribise los miembros del Consejo de Dirección para un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de su elección, con apego al Artículo 21 de los Estatutos de la Corporación.

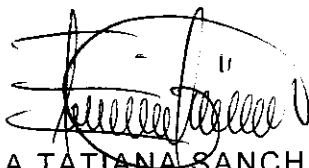
Nombre	Cargo	Cédula
María Teresa Peláez Vélez	Presidente	43.604.801

Francisco Alexander Vahos Sarrias	Secretario	71.758.202
Cruz Haydee Castrillón Vélez	Tesorera	43.518.948
José Rodolfo Vahos Sarrias	Jefe de Proyectos	71.718.438

Inscribase el nombramiento de la señora MARIA TERESA PELAEZ VELEZ, identificada con cédula 43.604.801 como Representante Legal, en su calidad de Presidente para un periodo de dos (2) años contados a partir de la fecha de su designación, de conformidad con el Acta número 13 realizada el 25 de junio de 2012.

Publíquese en la Gaceta Departamental a costa de los interesados, surtido el trámite produce efectos legales.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Nº 161100 1 Vez

ERIKA TATIANA SANCHEZ GOMEZ
Directora Administrativa y Contractual

PRORROGA No.02 CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - "CORPOICA" - NIT. No 800.194.600.3 No. 2009-CF-1800-67

Entre los suscritos a saber **DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO**, Secretario de Agricultura Departamental y Desarrollo Rural, identificado con cédula de ciudadanía N° 70.034.545 de Medellín, quien obra como delegado del señor Gobernador del Departamento de Antioquia para la celebración de Contratos, facultado por los Decretos Nos. 0007 y 0008 del 2 de Enero de 2012, en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y el Decreto 777 del 16 de Mayo de 1992 y el Decreto modificadorio No.1403 del mismo año, que para los efectos de este Contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** y **SERGIO BENJAMIN CORREA PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.8.281.836 de Medellín, quien en calidad de Director del Centro de Investigación La Selva obra en nombre y Representación Legal de **LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - "CORPOICA"** - identificada con Nit. 800.194.600.3, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de Febrero de 1997, bajo el No. 2146 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, quien en adelante se denominará **CORPOICA**, hemos decidido celebrar la presente Prorroga No.02 al Contrato No.2009-CF-1800-67, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que se hace necesario prorrogar el presente contrato por el atraso en el desarrollo proyecto que está relacionadas con la dependencia de la disponibilidad de la semilla básica, insumo indispensable para iniciar el proceso de producción de semilla certificada, que tengan los productores de la Sabana Cundiboyacense, la cual por efectos del clima adverso (invierno, fenómeno de la niña) han tenido sus dificultades para proveerla. **2.** El proyecto contempla el desarrollo de tres procesos de producción de semilla certificada, de tal manera que se dispusiera de la información suficiente y necesaria para hacer recomendaciones, en este momento y hasta el mes de Diciembre, se tendrán en campo parcelas correspondientes a los dos últimos procesos que debe ser monitoreadas permanentemente, para responder con normatividad de producción de semilla certificada de papa, reglamentada por el ICA. **3.** Que el contrato inicio el día 24 de Diciembre de 2009 con fecha de terminación el día 24 de Diciembre de 2011. **4.** Que el día 22 de Diciembre de 2011, mediante Otrosí No.1 se prórrogó el contrato en Seis (6) meses más, quedando como nueva fecha de vencimiento el día 24 de junio de 2012. **5.** Que la prórroga No.2 fue aprobada en el Acta No.17 del

Comité Interno de Contratación de fecha 22 de Junio de 2012 celebrado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural . **6-** Que se modificará la cláusula sexta del Contrato No.2009-CF-1800-67, por las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula Sexta del Contrato No.2009-CF-1800-67, cuyo objeto es: Implementar un programa de producción de semilla de papa certificada en el Municipio de San José de la Montaña de las variedades Diacol Capiro y/o papa criolla, analizar la prefactibilidad de establecer una empresa productora de semilla de papa certificada, para el Departamento de Antioquia, capacitar los productores en el manejo de semilla de buena calidad y en el manejo agronómico de la papa en el sentido de prorrogar el término inicialmente pactado, en Seis (6) meses más, contados a partir del 24 de junio de 2012, (fecha actual de vencimiento del Contrato) y hasta el 23 de Diciembre del 2012. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS.-** El Contratista se compromete a modificar las garantías constituidas para el contrato original ajustadas a su nuevo plazo. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista deberá estar a paz y salvo con sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral Y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato No.2009-CF-1800-67, que no hayan sido modificadas mediante la presente prórroga de plazo. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** – La presente Prórroga No.2 se perfecciona con la suscripción por las partes, para su ejecución se requiere: la aprobación de la ampliación de las garantías por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y La publicación en la Gaceta Departamental por parte de CORPOICA, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.

Nº 161101 1 Vez

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 22 días del mes de Junio de 2012


DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO

Secretario Agricultura y Desarrollo Rural


SERGIO BENJAMIN CORREA PELAEZ,

Representante Legal CORPOICA

PRORROGA No.02 CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - "CORPOICA" - NIT. No 800.194.600.3
No. 2010-SS-1800-34

Entre los suscritos a saber **DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO**, Secretario de Agricultura Departamental y Desarrollo Rural, identificado con cédula de ciudadanía Nº 70.034.545 de Medellín, quien obra como delegado del señor Gobernador del Departamento de Antioquia para la celebración de Contratos, facultado por los Decretos Nos. 0007 y 0008 del 2 de Enero de 2012, en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y el Decreto 777 del 16 de Mayo de 1992 y el Decreto modificadorio No.1403 del mismo año, que para los efectos de este Contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** y **SERGIO BENJAMIN CORREA PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.8.281.836 de Medellín, quien en calidad de Director del Centro de Investigación La Selva obra en nombre y Representación Legal de **LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - "CORPOICA"** - identificada con Nit. 800.194.600.3, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de Febrero de 1997, bajo el No. 2146 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, quien en adelante se denominará **CORPOICA**, hemos decidido celebrar la presente Prórroga No.02 al Contrato No.2010-SS-1800-34, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que se hace necesario prorrogar el presente contrato porque la Ola Invernal del primer semestre y los problemas de orden público especialmente en Anorí y Guadalupe, han dificultado el desplazamiento y el avance de los procesos de capacitación **2.** La incorporación de nuevas variedades, sistemas de siembra, fertilización y nuevos sistemas de corte son tecnologías que requieren de un acompañamiento periódico prolongado que les facilite la solución de dudas e inquietudes que puedan surgir en el proceso. **3.** Que el contrato inicio el día 21 de Diciembre de 2010 con fecha de terminación el día 21 de

Diciembre de 2011. **4.** Que el día 16 de Diciembre de 2011, mediante Otrosí No.1 se prórrogó el contrato en Seis (6) meses más, quedando como nueva fecha de vencimiento el día 21 de junio de 2012. **5.** Que la prórroga No.2 fue aprobada en el Acta No.13 del Comité Interno de Contratación de fecha 6 de junio de 2012 celebrado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acta No.043 del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia, de fecha 12 de Junio de 2012. **6-** Que se modificará la cláusula sexta del Contrato No.2010-SS-1800-34, por las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula Sexta del Contrato No.2010-SS-1800-34, cuyo objeto es: "Apoyo para la capacitación en cultivo de caña para panela a 22 grupos comunitarios en los municipios de Angostura, Anorí, Anzá, Argelia, Dabeiba, Don Matías, Cañas Gordas, Guadalupe, Granada, Montebello, Nariño, Peque, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo,, Sonsón, San Roque (2 grupos) Támesis, Titiribí, Yalí y Yolombó" en el sentido de prorrogar el término inicialmente pactado, en Seis (6) meses más, contados a partir del 21 de junio de 2012, (fecha actual de vencimiento del Contrato y hasta el 20 de Diciembre del 2012. **CLAUSULA. SEGUNDA: GARANTÍAS.-** El Contratista se compromete a modificar las garantías constituidas para el contrato original ajustadas a su nuevo plazo. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista deberá estar a paz y salvo con sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral Y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato No.2010-SS-1800-34 que no hayan sido modificadas mediante la presente prórroga de plazo. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** – La presente Prórroga No.2 se perfecciona con la suscripción por las partes, para su ejecución se requiere: la aprobación de la ampliación de las garantías por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y La publicación en la Gaceta Departamental por parte CORPOICA, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 12 días del mes de Junio de 2012

Nº 161102 1 Vez


DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO
Secretario Agricultura y Desarrollo Rural


SERGIO BENJAMIN CORREA PELAEZ,
Representante Legal CORPOICA

PRORROGA No.02 CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - "CORPOICA" - NIT. No 800.194.600.3 No. 2010-SS-1800-09

Entre los suscritos a saber **DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO**, Secretario de Agricultura Departamental y Desarrollo Rural, identificado con cédula de ciudadanía Nº 70.034.545 de Medellín, quien obra como delegado del señor Gobernador del Departamento de Antioquia para la celebración de Contratos, facultado por los Decretos Nos. 0007 y 0008 del 2 de Enero de 2012, en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios y el Decreto 777 del 16 de Mayo de 1992 y el Decreto modificatorio No.1403 del mismo año, que para los efectos de este Contrato se denominará **EL DEPARTAMENTO** y **SERGIO BENJAMIN CORREA PELAEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.8.281.836 de Medellín, quien en calidad de Director del Centro de Investigación La Selva obra en nombre y Representación Legal de **LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - "CORPOICA"** - identificada con Nit. 800.194.600.3, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de Febrero de 1997, bajo el No. 2146 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, quien en adelante se denominará **CORPOICA**, hemos decidido celebrar la presente Prórroga No.02 al Contrato No.2010-SS-1800-09, previas las siguientes consideraciones: **1.-** Que se hace necesario prorrogar el presente contrato porque la Ola Invernal del primer semestre, ha afectado la floración en las parcelas de evaluación y en general en todos los cultivos de aguacate del Departamento y por ende el estudio de la fenología del cultivo. **2.** Se requiere tener mayor información sobre las parcelas en evaluación,

que ayuden a definir las zonas óptimas del cultivo de aguacate en el Departamento y que permita establecer un manejo más adecuado de este cultivo y hacer la transferencia de tecnología a los productores. 3. Faltan algunas actividades de transferencia de tecnología, entre las que se destaca la actualización y publicación de un libro sobre el cultivo de aguacate, actividad que requiere de tiempo para su ajuste y publicación. 4. Que el contrato inicio el día 15 de Diciembre de 2010 con fecha de terminación el día 15 de Diciembre de 2011. 5. Que el día 15 de Diciembre de 2011, mediante Otrosí No.1 se prórrogó el contrato en Seis (6) meses más, quedando como nueva fecha de vencimiento el día 15 de junio de 2012. 6. Que la prórroga No.2 fue aprobada en el Acta No.11 del Comité Interno de Contratación de fecha 30 de mayo de 2012 celebrado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Acta No.040 del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación del Departamento de Antioquia, de fecha 1º de Junio de 2012. 3- Que se modificará la cláusula sexta del Contrato No.2010-SS-1800-09, por las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula Sexta del Contrato No.2010-SS-1800-09, cuyo objeto es: Evaluar el comportamiento agronómico y productivo de la variedad de aguacate hass en diferentes pisos térmicos del Departamento de Antioquia en el sentido de prorrogar el término inicialmente pactado, en Seis (6) meses más, contados a partir del 15 de junio de 2012, (fecha actual de vencimiento del Contrato) y hasta el 14 de Diciembre del 2012. **CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS.-** El Contratista se compromete a modificar las garantías constituidas para el contrato original ajustadas a su nuevo plazo. **CLAUSULA TERCERA:** El contratista deberá estar a paz y salvo con sus obligaciones frente a los sistemas de Seguridad Social Integral Y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Continúan vigentes todas las estipulaciones del Contrato No.2010-SS-1800-09 que no hayan sido modificadas mediante la presente prórroga de plazo. **CLAUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO.** – La presente Prórroga No.2 se perfecciona con la suscripción por las partes, para su ejecución se requiere: la aprobación de la ampliación de las garantías por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y La publicación en la Gaceta Departamental por parte de CORPOICA, requisito que se entiende cumplido con el pago de los derechos correspondientes.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los 12 días del mes de Junio de 2012

Nº 161103 1 Vez


DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO

Secretario Agricultura y Desarrollo Rural


SERGIO BENJAMIN CORREA PELAEZ,

Representante Legal CORPOICA

Resolución Número

00455

de 2003 JUL 2012

**POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA UNA REFORMA ESTATUTARIA Y SE INSCRIBE
A UNOS DIGNATARIOS**

EL GERENTE DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto 1682 del 10 de julio de 2008 emanado por la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y,

CONSIDERANDO

1. Que el Club DEPORTES CAMPESINO, con domicilio en el municipio de San Carlos (Antioquia), en Asamblea Universal de Febrero 5 de 2012 y reunión del órgano de administración de mayo 25 de 2010; reformaron los estatutos, eligieron el órgano de administración, control y disciplina y distribuyeron los cargos según consta en dichas actas de acuerdo con los estatutos.
2. Que dichas reformas no desvirtúan los fines esenciales que persigue la entidad, ni son contrarias al orden legal, la moral o las buenas costumbres y la petición reúne todos los requisitos exigidos por la Ley.



3. Que el señor JULIO CESAR OSPINA USME, en su calidad de Presidente solicita se apruebe la reforma estatutaria, su inscripción como Representante Legal y la de los demás dignatarios

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las reformas introducidas a los Estatutos del Club DEPORTES CAMPESINO, con domicilio en el municipio de San Carlos (Antioquia)

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir en el libro respectivo el nombre del señor JULIO CESAR OSPINA USME, identificado con la cédula 70.161.392, como Representante Legal, en su calidad de Presidente de la Entidad denominada Club DEPORTES CAMPESINO, con domicilio en el municipio de San Carlos (Antioquia). Así mismo inscribir a los siguientes dignatarios:

HECTOR RODRIGUEZ OSORIO	Como Tesorero,	C.C. N° 5.913.979
EMMA DE JESUS ALZATE GIRALDO	Como Secretaria,	C.C. N° 21.998.608
JAVIER GIL	Como Fiscal	C.C. N° 70.162.310
EDILSON DE JESUS HERNANDEZ GARCIA	Comisión Disciplinaria,	C.C. N° 70.165.546
JOHN FERNANDO OSPINA	Comisión Disciplinaria,	C.C. N° 70.166.157
ISRAEL ALBERTO CORTES GONZALEZ	Comisión Disciplinaria,	C.C. N° 70.160.997

Todos ellos ejercerán sus funciones para completar el periodo estatutario de cuatro años contados a partir del 05 de Febrero de 2012, según los estatutos.

Publíquese la presente resolución en la Gaceta Departamental o en un Diario de amplia circulación en el departamento a costa de los interesados. Cumplido este requisito surte sus efectos legales.

N° 161104 1 Vez


ESTEBAN ESCOBAR VELEZ
Gerente

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AVISA

Que el día 23 de abril de 2012, falleció el (la) señor (a) **RODOLFO DE JESÚS QUIROS ORREGO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 565.658, se ha presentado a reclamar la pensión de sobrevivientes el (la) señor (a) **LUZ JACQUELINE MORALES GAVIRIA**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 43.433.930, en calidad de compañera permanente.

Otras personas que se consideren con derecho en el negocio que se tramita, deben presentarse a hacerlo valer a la Dirección de Prestaciones Sociales y Nómina del Departamento de Antioquia, en el término de treinta (30) días.

Medellín, julio 06 de 2012

JUAN CARLOS CADAVID LOAIZA
Auxiliar

DECRETO N°

1648

()

11 JUL 2012

Por medio del cual se hacen unas delegaciones para la conformación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD, a los cuales pertenece el Departamento de Antioquia

El Gobernador de Antioquia en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012, Decreto Nacional 1075 del 22 de mayo de 2012, el Acuerdo 004 del 25 de mayo de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, Ley 489 de 1998 artículo 9,

CONSIDERANDO

- Que la Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 reguló la organización y funcionamiento del sistema general de regalías; definiendo los órganos del sistema general, y entre ellos los Órganos colegiados de administración y decisión - OCAD.
- Que según el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012 los OCAD son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos. También designarán su ejecutor que será de naturaleza pública; todo de conformidad con lo previsto en la presente ley.
- Que según el artículo 35 de la Ley 1530 de 2012 las decisiones de estos órganos colegiados de administración y decisión, se adoptan con un mínimo de dos votos favorables. el número de votos será máximo tres (3), uno por cada nivel de gobierno, así: gobierno nacional un voto; departamental un voto; y municipal y distrital un voto. Es necesaria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno para la toma de decisión.
- Que según el artículo 14 del Decreto Nacional 1075 del 22 de mayo de 2012, los proyectos de inversión que se financien con cargo al 40% del Fondo de Compensación regional podrán ser definidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por Órganos Colegiados de Administración y Decisión municipales.
- Que el artículo 2 del Decreto Nacional 1075 del 22 de mayo de 2012, define las funciones de los OCAD.
- Que para el año 2012, los municipios del Departamento de Antioquia que podrán participar con proyectos con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional son 113; así: Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Amalfi, Andes, Angelópolis, Angostura, Anorí, Anzá, Arboletes, Argelia, Armenia, Belmira, Betania, Betulia, Briceño, Buriticá, Cáceres, Caicedo, Campamento, Cañasgordas, Caracolí, Caramanta, Carepa, Carolina, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Cocorná, Concepción, Concordia, Dabeiba, Don Matías, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Entreríos, Fredonia, Frontino, Giraldo, Gómez Plata, Granada, Guadalupe, Guarne, Guatapé, Heliconia, Hispania, Ituango, Jardín, Jericó, La Ceja, La Pintada, La Unión, Liborina, Maceo, Marinilla, Montebello, Murindó, Mutatá, Nariño, Nechí, Necoclí, Olaya, Peñol, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Remedios, Retiro, Sabanalarga, Salgar, San Andrés de Cuerquía, San Carlos, San Francisco, San Jerónimo, San José de La Montaña, San Juan de Urabá, San Luis, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Rafael, San Roque, San Vicente, Santa Bárbara, Santa Rosa de Osos, Santafé de

Antioquia, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Tarazá, Tarso, Titiribí, Toledo, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Venecia, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó y Zaragoza

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Delegar a los siguientes Servidores Públicos Departamentales la representación de la Gobernación en los respectivos OCAD, así:

OCAD de los Municipios de la Subregión del Bajo Cauca

Delegado: BEATRIZ WHITE CORREA

Cargo: Participación Ciudadana y Desarrollo Social

OCAD de los Municipios de la Subregión del Nordeste

Delegado: LUIS H. BERRÍO OSORIO

Cargo: Asesor Secretario Privado

OCAD de los Municipios de la Subregión del Magdalena Medio

Delegado: TOMÁS MOLINA MEJÍA

Cargo: Secretario de Productividad y Competitividad

OCAD de los Municipios de la Subregión del Norte

Delegado: DIEGO MIGUEL SIERRA BOTERO

Cargo: Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

OCAD de los Municipios de la Subregión del Occidente

Delegado: MARIA EUGENIA ESCOBAR NAVARRO

Cargo: Secretaria de Hacienda

OCAD de los Municipios de la Subregión del Oriente

Delegado: MARIA EUGENIA RAMOS VILLA

Cargo: Directora del Departamento Administrativo de Planeación

OCAD de los Municipios de la Subregión del Suroeste

Delegado: ALEJANDRO OLAYA DÁVILA

Cargo: Director de Ciencia y Tecnología

OCAD de los Municipios de la Subregión del Urabá

Delegado: RUBEN HERNANDO FERNANDEZ ANDRADE

Cargo: Director de Antioquia Legal

ARTÍCULO 2. Los delegados de la Gobernación de Antioquia a los OCAD municipales asumen las funciones dadas por la Ley, los decretos reglamentarios y los Acuerdos de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

ARTÍCULO 3. El presente Decreto rige a partir de su expedición.


SERGIO FAJARDO VALDERRAMA

Gobernador de Antioquia 11